

SALVE AL PAIS

**DE LA
CORRUPCION
POLITICA**

**VOTE AL
SOCIALISMO**



CISA - I. de Flores 1580 bis

**Vivimos Bajo un Régimen
de Corrupción
Política y Administrativa**

**ACUSACION
Y PRUEBAS**

**Discurso del Diputado Socialista
Dr. JOSE P. CARDOSO
(Agosto 16 de 1954)**



Audiciones Radiales Socialistas

LA VOZ DEL PARTIDO SOCIALISTA

Se trasmite Martes, Jueves y Sábados, a las 20 y 30 horas, por CX 18 - Radio Sport.



CONVERSANDO CON LOS TRABAJADORES

Se trasmite por CX 18 - Radio Sport, a las 21 y 45 horas, los días Martes, Miércoles y Viernes. Los sábados a las 20.55.



CHARLAS JUNTO AL HOGAR

Se trasmite por CX 36 - Radio Centenario a las 13.50 horas, los días Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes.



EN PAYSANDU

Tribuna Obrera Socialista

Se trasmite por CW 39 - Radio La Voz de Paysandú, los Viernes a las 17 y 30 horas.



EN MELO

CW 53 - La Voz de Melo

Domingos: a las 13.15: 15 minutos.
Domingos: A las 16 y 16.55: 2 minutos.
Lunes: A las 16 y 16.55: 2 minutos.
Martes: A las 12 y 2: 5 minutos.
Miércoles: A las 20 y 45: 15 minutos.
Jueves: A las 12 y 2: 5 minutos.
Viernes: A las 16.55: 2 minutos.
Sábados: A las 12 y 2: 5 minutos.



EN SALTO

Tribuna Socialista

Se trasmite todos los días a las 13.50 horas, por CW 23 Radio Cultural de Salto (830 kilociclos).

SUMARIO

El dedo en la llaga (Editorial de "El Sol") Pág. 3

DISCURSO DEL DIPUTADO SOCIALISTA

Dr. JOSE P. CARDOSO

Estamos defendiendo la democracia Pág. 9

La influencia del pacto batlli-herrerista Pág. 10

El Consejo N. de Gobierno nombra a familiares de Consejeros y Ministros, para empleos en el Ministerio de Relaciones Exteriores Pág. 11

Insensibilidad del Gobierno al designar para un cargo diplomático a uno de los Directores del Puerto, antes de que el mismo Gobierno y la Justicia tomen resolución sobre los graves cargos probados en la Cámara Pág. 11

Los dos grupos batllistas rivales, la 14 y la 15, se acusan mutuamente de corrupción política y administrativa. Fraude, falta de frenos morales, compra de votos, malversación de dineros públicos, explotación de las jubilaciones, intervención descarada de la policía, etc. Pág. 13

En las Cajas de Jubilaciones funcionan comités electorales pagados con los dineros públicos. Coimas electorales y de las otras. Pág. 19

En el Ministerio de Obras Públicas designación de obreros, con violación de la ley, por simple nota del Secretario del Ministro. Regalo de grandes sumas de dinero pertenecientes al Estado. Pág. 22

Para reingresar a Ancap, los obreros cesantes por las "medidas de seguridad" tenían que pasar por un club batllista. Explotación negrera en "El Espinillar". Pág. 24

No se respeta ni la salud de las personas en el aprovechamiento político electoral del Ministerio de Salud Pública. Pág. 27

Se reparten los guardiaciviles en proporción a los integrantes de la Mayoría del Consejo Nal. de Gobierno. Prueba documentada. Pág. 29

Un ejemplo típico, en la Comisión de Subsistencias, de cómo cunde este concepto corruptor: lo que vale en funcionarios es la influencia política y no los méritos funcionales. Pág. 31

En la Administración de los Ferrocarriles: violación de la ley, irregularidades, injusticias, paracaidismo. ¿Cómo van a arreglar esto los partidos del gobierno? Pág. 32

Instituto del Trabajo... o de la coima. El correo ¿para qué hablar? La novedad novedosa: "inspectores de arbolados". Relaciones Exteriores, donde los viáticos gobiernan. Pág. 33

Un desafío al diputado César Batlle Pacheco. Pág. 34

Un Senador, cuyas actividades debían acarrearle la pérdida del cargo legislativo... sigue en el Senado. Pág. 35

Evidente implicancia del miembro del Directorio del Banco de la República, Sr. Carlos Sapelli. Con violación de la ley 10.000, al otorgar cuotas de importación, beneficia a las empresas de las que es miembro el Sr. Sapelli. Pág. 37

El caso del Director de la Universidad del Trabajo. Cuando el poder político apoya o protege la corrupción administrativa es cuando el poder político está también infectado por una profunda corrupción política. Pág. 42

Fraude electoral organizado, en Rivera. Pág. 44

La corrupción en los procedimientos políticos y administrativos es una realidad alarmante. Pág. 46

El Dedo en la Llaga

Editorial de EL SOL, del
18 de Agosto de 1954.

Estuvo muy en su hora la recia afirmación con que los diputados socialistas marcaron a fuego la situación administrativa y política que atraviesa el país.

En el presente número de EL SOL hallarán nuestros lectores la versión íntegra del formidable discurso con que el doctor José P. Cardoso fundó su aserto ante una Cámara que se sintió obligada a tomarlo muy seriamente en cuenta como cabeza de un proceso sensacional.

Puede decirse que nuestros diputados en la sesión del 11 del corriente pusieron el dedo en una llaga purulenta cuya existencia nadie duda, porque inficiona el ambiente y casi no hay en el país quién, de un modo u otro, no haya tenido a su alcance desagradables manifestaciones de la misma.

Como acotación a las nuevas revelaciones de escandalosas anormalidades ocurridas en la ya tristemente famosa Administración del Puerto, el doctor Dubra exclamó:

"Este es un problema de moral administrativa que está afectando a través, prácticamente, de todas las reparticiones de la Administración Pública, la propia salud de la democracia política de nuestro país".

Y el doctor Cardoso a su vez reiteró el concepto diciendo que "nadie puede negar que vivimos en un estado de corrupción administrativa y política".

Pero subrayó con impresionante energía su afirmación al expresar que esa frase no era en sus labios una improvisación, sino

la exteriorización reflexiva de un pensamiento madurado en la observación detenida y preocupada de realidades palpables.

Detrás de esas palabras se erguía toda la autoridad moral de nuestros diputados con su bien ganado prestigio de hombres que no tienen pelos en la lengua, pero acompañan siempre lo que dicen con el más firme sentido de su responsabilidad.

Esa declaración de Cardoso, de que no lanzaba un ataque improvisado al pasar sino que exponía serena y meditadamente una profunda convicción, fué, precisamente, la que movió a un representante herrerista, el doctor Ferrer Serra, a proponer que la Cámara se ocupase en ventilar el gravísimo problema planteado a la conciencia del país por esas palabras.

Es así cómo nuestros representantes hallaron la ocasión de detenerse a dar la razón de sus dichos en una memorable oportunidad parlamentaria sobre la cual tuvo sus ojos fijos la nación entera.

El proceso que incoa y explaya ante el Parlamento el discurso insertado hoy en nuestras columnas resulta aplastante.

Y no sólo para los directamente responsables, como gobernantes, legisladores y políticos, de tanta podredumbre moral y de tanta subversión de las más elementales normas de corrección administrativa, sino para el decoro de la República y el prestigio de nuestras instituciones.

El cae, en efecto, como una lápida ilevantable sobre todo un periodo de nuestra historia política en que se han batido numerosos records de escandalosas inmoralidades comprobadas y documentadas en investigaciones que nunca llegan a manos de la justicia ordinaria.

Y así los mayores culpables gozan de la impunidad y vuelven a disponer de cargos públicos en una irritante burla de los intereses nacionales y de los más esenciales principios de la decencia.

Las sucias y funestas prácticas que imperan en materia de aprovechamiento indebido de los presupuestos para incrementarlos con sumas fabulosas metiendo en ellos parientes de los gobernantes o recomendados de los caudillos y clubes, llegaron a los más altos grados de la desaprensión y desvergüenza.

Y lo que alarma hasta el sobrecogimiento es que el mal tiene sus raíces más que en las malas costumbres de una camarilla ins-

talada transitoriamente en el poder, en todo un sistema abusivo y corruptor usufructo de las ventajas oficiales, en el que se complican por su conducta política grandes partidos con predominio electoral en la vida física y espiritual de nuestra democracia.

El punto de partida del calamitoso nuevo impulso de internación en la maraña de abusos y tripotages para poner el erario público, el trabajo y las necesidades del pueblo al servicio de las amistades políticas y las adhesiones electorales, debe buscarse en el maridaje de batllistas y herreristas con sus fórmulas aritméticas de connivencia y repartija burocrática.

Ahí comienza, desde las primeras maniobras contubernistas de los viejos enemigos, bajo la presidencia de Luis Batlle hasta las complicidades actuales, remachadas con las legalizaciones del pacto en la reforma constitucional, la "nueva era" de la descomposición administrativa —que, por cierto, viene de muy atrás— pero a cuya intensificación galopante asistimos desde entonces.

Y hoy ya pertenecen a la sensibilidad y preocupación general de la ciudadanía consciente la amarga convicción y la sincera alarma que tradujeron en el Parlamento, cumpliendo con su deber, los diputados socialistas.

**Vivimos Bajo un Régimen
de Corrupción
Política y Administrativa**

**ACUSACION
Y PRUEBAS**

**Discurso del Diputado Socialista
Dr. JOSE P. CARDOSO
(Agosto 16 de 1954)**



CARDOSO. — Sr. Presidente: la exposición que inicio en este instante será, principalmente, una relación de hechos, la mayoría de ellos públicos, pero que adquieren un especial significado al ser citados y considerados en conjunto. No obstante, antes de entrar a esta exposición de hechos, debo citar dos antecedentes, porque ellos encierran conceptos que deseamos ratificar expresamente en este momento.

ESTAMOS DEFENDIENDO LA DEMOCRACIA

Al comenzar esta Legislatura formulé en el seno de esta Cámara una exposición sobre irregularidades y vicios en el proceso electoral que culminó con la elección de noviembre de 1950, y en esa oportunidad, expresé lo siguiente:

“Los procedimientos de que vamos a ocuparnos desprestigian la organización democrática, le causan daño, y entendemos que no es silenciando u ocultando nuestros males como vamos a consolidar nuestras libertades.

“La democracia constituye una riqueza demasiado grande para no cuidarla celosamente y entendemos que a través de los sucesos de que vamos a ocuparnos, ocurridos en el último proceso electoral, se empieza a marchar por un mal camino. Nuestro propósito al hacer esta exposición es contribuir en la medida de nuestras posibilidades, a detener el mal. Creemos que estos hechos configuran un verdadero retroceso político en la vida del país y queremos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ese proceso se detenga”.

Luego, en esa exposición me ocupé del aprovechamiento notorio de la administración pública con fines electorales; destaqué que se había creado un clima de estímulo al favor de las alturas; demostré también que habían existido procedimientos corruptores de la conciencia cívica; traje casos concretos en el Departamento de Salto; me referí asimismo a ese novedoso procedimiento que se ha incorporado en estos últimos años a las prácticas políticas en nuestro país, que son los pactos para repartirse el período legislativo sobre la base después, en muchos casos, como lo conocen los señores Diputados, de licencias por pseudo enfermedades.

Aprovecho para decir, en un paréntesis, que espero que la Cámara aprobará rápidamente, a breve plazo, antes de terminar sus

trabajos, el proyecto de resolución que con el Doctor Leirana hemos presentado para evitar que eso de las licencias se repitan.

Como ven los señores Diputados, yo he querido, al recordar este antecedente, ratificar nuestro concepto de que estamos actuando en defensa de la democracia nacional y poner en evidencia al mismo tiempo, que ya al comienzo de esta Legislatura nos preocupaba la corrupción política que está invadiendo el ambiente nacional.

Hace unos meses, en ocasión de discutirse las conclusiones de la Comisión Investigadora de la Administración Nacional de Puertos, dije lo siguiente:

"Hay un clima de desaprensión que en algunos casos es francamente un clima de corrupción, porque lo que signifique inconducta política o inconducta administrativa, aunque no llegue al campo de lo doloso o de lo ilícito, configura a veces corrupción política y administrativa y ante todo eso no tenemos otro camino que denunciar públicamente lo que está ocurriendo. Es lo único que nosotros podemos hacer".

Ratifico también estos conceptos que se referían ya en forma más abierta no sólo a la corrupción política, sino también a la corrupción administrativa.

LA INFLUENCIA DEL PACTO BATLLI-HERRERISTA

Sr. Presidente: los vicios, en lo administrativo, no son separables de lo político. Tan es así que hay un hecho político que ha sido y es en nuestra opinión un factor muy importante en los graves desarreglos administrativos de que padecemos. En efecto, esta desgraciada etapa de la vida nacional adquiere características graves desde el momento en que el Partido Herrerista renuncia, como renunció, a ser un partido de oposición a través de la coincidencia pactada primero, de la coincidencia constitucionalizada después. El posible contralor de un fuerte Partido de oposición ha disminuido y casi prácticamente ha desaparecido a través de un régimen de verdadera coparticipación en el poder.

Pero hay otro hecho, éste con caracteres de permanencia, que es, como lo recordaba hace un instante, el aprovechamiento político de la administración pública, hecho éste que está en la base de la mayor parte de los casos que yo voy a tratar esta tarde.

La repercusión más estacada de esa coincidencia ahora constitucionalizada, fué el Presupuesto General de Gastos. Me refiero especialmente al Presupuesto en su preparación en la etapa del Senado y en la Asamblea General, cuando se constituyó una Comisión extraparlamentaria —conocida comúnmente como "Antiparlamentaria"— cuando los Ministros de Estado pasaban de largo por la Sala de las Comisiones legítimas de Presupuesto y de Asuntos Financieros, para ir a reunirse exclusivamente con los legisladores batllistas y herreristas.

EL CONSEJO N. DE GOBIERNO NOMBRA A FAMILIARES DE CONSEJEROS Y MINISTROS, PARA EMPLEOS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Algunos hechos vinculados al Presupuesto son exponentes claros de corrupción. En efecto —y voy a limitarme a citar un ejemplo típico— como consecuencia de los paréntesis o por designación para cargos vacantes o creados en el nuevo Presupuesto, fueron favorecidos con designaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores —por resolución, naturalmente, del Consejo Nacional de Gobierno— numerosos familiares de miembros del Poder Ejecutivo. Esa lista ha sido publicada y no ha sido motivo de rectificación y por eso yo la voy a ratificar en este momento en la Cámara, la voy a reiterar en parte —la lista es larga— mencionando los casos de familiares de aquellos gobernantes que son miembros del Poder Ejecutivo.

La nuera del señor Martínez Trueba, designada secretaria de tercera clase; la hija del doctor Blanco Acevedo, secretaria de segunda clase; un sobrino político del doctor Forteza, cónsul de tercera clase; un hijo del señor Dupetit Ibarra, cónsul de cuarta clase; un hijo del doctor Pittaluga, secretario de tercera clase; un secretario personal del doctor Pittaluga, cónsul de tercera clase; un sobrino del doctor Blanco Acevedo, canciller de consulado.

Yo he querido iniciar este cortejo que verá desfilar la Cámara esta tarde con la mención de este hecho tremendamente censurable

INSENSIBILIDAD DEL GOBIERNO AL DESIGNAR PARA UN CARGO DIPLOMATICO A UNO DE LOS DIRECTORES DEL PUERTO, ANTES DE QUE EL MISMO GOBIERNO Y LA JUSTICIA TOMEN RESOLUCION SOBRE LOS GRAVES CARGOS PROBADOS EN LA CAMARA

Ahora, en este desfile, debería ocupar un lugar de honor la Administración Nacional de Puertos; pero voy a dejar su conducción en manos del doctor Triánón que mañana seguirá hablándonos de este asunto. No obstante, tengo que referirme a un solo punto porque él es un índice claro de la época que estamos viviendo. Me refiero a la designación del señor García Méndez para un alto cargo diplomático en el extranjero.

Termina la investigación parlamentaria y la Cámara aprueba una moción que en su primera parte dice lo siguiente: "Remítanse todos los antecedentes de la investigación practicada por la Comisión que entendió en las denuncias sobre irregularidades en la Administración Nacional de Puertos al Poder Ejecutivo: a) Para que se adopten las medidas necesarias tendientes a la efectividad de

las responsabilidades funcionales comprobadas". El Consejo Nacional de Gobierno pasa en vista el asunto al Fiscal de Corte y éste, en un dictamen que acaba de ser publicado, luego de referirse, en el capítulo VIII a las responsabilidades penales, se ocupa de las responsabilidades constitucionales.

Y dice esto: "Pertenecen a esta categoría, las imputables por acción u omisión a los miembros del Directorio. La Comisión Investigadora declaró, en efecto, por unanimidad de sus integrantes y de manera contundente, que la responsabilidad fundamental corresponde al Directorio, cuya gestión, ante los hechos denunciados y comprobados, ha comprometido evidentemente el prestigio y las finanzas del organismo; y la Cámara, por su parte, con igual energía, que esos hechos son de los que ponen en peligro y exponen al descrédito la gestión del Estado ante la opinión pública".

Y continúa el Fiscal: "Y estas graves calificaciones de esos organismos legislativos, y lo expresado en el número 8 de este dictamen" —se refiere a las responsabilidades penales— "son suficientes, en el parecer de este ministerio, para juzgar que la gestión de los Directores del servicio investigado, es inconveniente e ilegal. Consiguiente, si el Poder Ejecutivo compartiese este criterio —como por el mérito de autos el infrascripto cree lo compartirá, el procedimiento a seguir para la efectividad de las responsabilidades consecuentes, sería el previsto por el artículo 199 de la Carta". Como saben los señores diputados, la advertencia, la denuncia ante el Senado, etc.

"Y dice el dictamen que tal cosa correspondería en el caso de compartir el Poder Ejecutivo esas apreciaciones, porque constitucionalmente es privativa de este poder la iniciativa del indicado procedimiento disciplinario especial, lo que hace que el solo pronunciamiento de la Cámara no sea decisivo al efecto."

Y termina el Fiscal de Corte señalando, como conclusiones, los procedimientos a seguir. En segundo término, éste: "Ejercicio por el Consejo Nacional de Gobierno, de la facultad establecida en el artículo 199 de la Constitución, en relación con los actuales miembros del Directorio de la Administración Nacional de Puertos que lo integraban durante el periodo en que ocurrieron los hechos investigados".

Y bien. Antes de tomar resolución sobre el asunto, a pesar de este dictamen concluyente del Fiscal de Corte; antes de pasar todos los antecedentes a la Justicia, como dijo la otra tarde el señor Ministro de Hacienda que lo hará el Poder Ejecutivo, el Consejo Nacional de Gobierno designa a uno de los miembros de ese Directorio, para ocupar un alto cargo en el personal diplomático de la República, y este ciudadano se traslada al extranjero.

Naturalmente, yo no sé si deslindadas, al final, todas las responsabilidades, corresponderían o no sanciones a este ex Director, sanciones que pueden ser por acción o por omisión. Pero eso inte-

resa poco; lo que interesa es destacar el grado de insensibilidad del Gobierno, su alarmante insensibilidad, su menosprecio de las conclusiones del Parlamento, del dictamen del Fiscal de Corte y de la opinión pública, al realizar la designación a que me estoy refiriendo.

El diario "El Día", al despedir con un panegirico al ex Director, dice: "Parte de esa actuación" —se refiere a su actuación administrativa— "se concretó en el desempeño de las funciones de Director de la Administración Nacional de Puertos, en la que acreditó sus condiciones de celoso defensor de los intereses que le fueron confiados, y competente gestor de los servicios cuya dirección compartió".

(Interrupción del diputado Arosteguy.)

Sr. CARDOSO. — Señor Presidente: como la Cámara habrá advertido, no se trata aquí de atacar ni de defender al señor García Méndez. Lo que yo estoy enjuiciando, especialmente, es la conducta de un Gobierno, la conducta de un Poder Ejecutivo que mientras un ex Director de un servicio descentralizado está enjuiciado por los organismos constitucionalmente habilitados para ello, lo premia designándolo para un alto cargo en el extranjero.

LOS DOS GRUPOS BATLLISTAS RIVALES, LA 14 Y LA 15, SE ACUSAN MUTUAMENTE DE CORRUPCION POLITICA Y ADMINISTRATIVA. FRAUDE, FALTA DE FRENOS MORALES, COMPRA DE VOTOS, MALVERSA-CION DE DINEROS PUBLICOS, EXPLOTACION DE LAS JUBILACIONES, INTERVENCION DESCARADA DE LA POLICIA, ETC.

Decía, y repito ahora, señor Presidente, que antes de ocuparme de otros puntos en la esfera propiamente administrativa, tengo que referirme a un capítulo del que surgen graves cargos de corrupción política y administrativa. Me refiero a la lucha interna en el principal Partido del Gobierno: el Partido Batllista. Esto tiene una gran importancia, que está por encima de los límites estrictos de una lucha intrapartidaria. Tiene gran importancia, por la responsabilidad de ese Partido en la marcha de la Administración Pública, y por su responsabilidad en la orientación de la actividad política y en la formación del clima político nacional. Creo que esto no puede discutirse. Yo no sé si las denuncias que uno y otro grupo se formulan, son o no totalmente exactas, pero digo, señor Presidente, que aun cuando sólo fueran parcialmente exactas, alcanzarían una tremenda gravedad.

Y me hago, además, esta reflexión: es que, si no fueran exactas, ¿no sería también terrible que en la lucha interna del principal Partido de Gobierno, el arma de la difamación y de la calumnia se utilizase como arma legítima de lucha? En segundo término, el solo

hecho de que estas denuncias se formulen públicamente se reiteren, se sostengan, se traigan y se lleven, configura un episodio importantísimo en la vida política del país. Y en tercer término, destaco que ellas tienen el respaldo de hombres que han gobernado el país hasta ayer, o que lo están gobernando hoy, o que son candidatos a los más altos cargos del Gobierno.

Yo voy a limitarme a extraer de un copiosísimo material, lo que resulta comprobatorio de la afirmación formulada por mí el otro día, y que ha dado motivo a esta reunión de la Cámara.

Tomo el ejemplar del diario "El Día" del domingo 6 de diciembre de 1953, página 8, segunda columna, encuentro que bajo el título "Cosa Juzgada" se dice algo que es sustancialmente lo mismo que yo he dicho aquí en la Cámara y que ha dado origen a que este Cuerpo se reúna para escucharme.

Fijense los señores Diputados que replica "El Día" a un reproche de "Acción", según el cual el primero de los diarios nombrados se expresaría con menoscabo de quienes estructuraron la Carta Orgánica del Partido, y dice: "Lo que hay es que quienes escribieron esas disposiciones lo hicieron en un clima muy distinto al que hoy reina en ciertos sectores del Partido. Y del país. Los que estructuraron esas disposiciones estaban seguros de que el freno moral era la mejor garantía y al dejar ancho campo a la incorporación de nuevos batllistas no pensaron que llegaría una época en que las tácticas políticas pudieran ser, incluso dentro del batllismo, regidas por otras normas que las de una escrupulosa buena fe".

He aquí la acusación clara de que en la lucha batllista se han perdido los frenos morales y se utiliza la mala fe.

De las numerosas acusaciones del otro grupo, que pueden encontrarse en el diario "Acción", extraigo ésta publicada el jueves ocho de abril de 1954, página tercera, columnas siete y ocho, y que se titula "A todo galope". Es un suelto en el que acusa al catorcismo de connivencia con el herrerismo para repartirse en forma indebida los cargos administrativos del Consejo Nacional de Gobierno, y dice así: "El herrerismo y el catorcismo están actuando a todo vapor en la Administración del Consejo Nacional y van llenando con amigos leales las vacantes que se producen. El régimen aparentemente es sencillo. Primero se llenan los huecos que se producen en las oficinas de ese importante sector de la Administración con empleados en comisión y después, en cuanto se produce la oportunidad, se propone a los Consejeros la efectividad de esos "empleados que hace tiempo están haciendo méritos". Es claro que este mecanismo exige una primer acomodada entre el herrerismo y la catorce, o mejor entre el herrerismo y el secretario doctor Jiménez de Aréchaga, que es el cerebro de estos arreglos, cumpliendo con el programa de dejar la administración de ese organismo en sus manos en la esperanza de poderlo controlar de cerca o desde lejos", etc.

(Interrupción del señor Representante Dubra.)

—Señor Presidente: encuentro en el mismo diario "Acción" del viernes cinco de marzo de 1954, en su página editorial, algo que no había conocido hasta estos últimos días y que no titubeo en calificar de impresionante. No puedo dejar de traerlo porque es un valioso elemento de juicio para demostrar la veracidad de mi acusación, es decir la corrupción política y administrativa.

En esa página, "Acción" publica una fotografía en la que se ve una casa, un montón de escombros y unas pilas de ladrillos, y encima este título: "Sume usted: ladrillismo más coacción más compra de conciencias, es igual a negación del batllismo". Y luego, al pie de la fotografía, un comentario del que voy a leer algunos párrafos: "La presente fotografía se vincula con un bochornoso método electoral que los batllistas de todas las tendencias teníamos derecho a creer definitivamente superado en todo el país, y cuya irrupción en el seno de las prácticas políticas de nuestra colectividad partidaria debe ser marcada con caracteres infamantes para que en modo alguno pueda repetirse. Nos referimos a la compra del voto, por parte de los dirigentes del brausismo, en ocasión de las recientes elecciones internas realizadas en el departamento de Canelones".

Más adelante, dice: "Desplegaron la gama completa de la coacción y ofrecieron torres y castillos, como si la administración pública, cuyos resortes controlan por entero en Canelones, estuviera al servicio de sus mezquinos intereses".

"Y por último: cuando el acto comicial era inminente y la parálisis de los presuntos votantes del brausismo seguía incambiada, recurrieron a la compra lisa y llana de las conciencias, repartiendo para ello cuanto tuvieron a mano: manojos de paja para quinchar, ladrillos, vales contra comercios locales, dinero contante y sonante pasado en el momento de estrechar la mano... Y los hombres que recurrían a estos extremos bochornosos eran los que, desde su prensa mendaz, invocaban luego el principismo partidario, el fervor colegialista y los grandes nombres de la historia del batllismo". Y sigue el suelto.

(Se vota una moción declarando debate libre.)

Sr. CARDOSO. — Por su parte "El Día", ni corto ni perezoso, comenta a su vez las elecciones internas en el Departamento de Montevideo.

Ha publicado, y viene publicando, numerosos y largos artículos.

De uno de ellos voy a extraer dos párrafos: "El análisis frío de los resultados de esos actos electorales, que venimos practicando para el Departamento de Montevideo, demuestra que el personalismo ha prefabricado los resultados generales de las elecciones internas, con el fin de presentarse como la mayoría avasallante del Partido en la capital de la República y que tiene, en consecuencia, la clave de la victoria en el país entero.

Sus métodos constituyen, por lo tanto, un fraude psicológico sin precedentes en la historia partidaria, y los ejecutores de la ma-

niobra, no han trepido en practicar formas directas y materiales del fraude, para asegurarse en los hechos, lo establecido como sombrio plan a cumplir con cualquier género de agravantes”.

Y luego, antes de terminar esto, formula estas preguntas:

“¿Cómo, sino por el fraude, puede una fracción partidaria sacar más votos en una elección interna, que en las elecciones nacionales? ¿Cómo, sino haciendo votar gentes de otros partidos, suplantando personas a favor de deficientes o inexistentes sistemas de contralor electoral, “llevando a votar” a muertos, a vivos —demasiado, quizás— y en algunos casos, quién sabe si necesariamente haciendo comparecer a alguien ante la mesa, o simplemente colocando el voto en la urna... para ahorrarse el trabajo”.

Luego, en el mismo diario “El Día” de fecha 6 de agosto —el otro era del 4 de agosto de este año— encuentro un artículo del que surgen elementos de juicio útiles para robustecer mi aserto de corrupción política y administrativa, pero no sólo en el campo de la corrupción política, sino también en el de la administrativa.

En efecto, bajo el título “Por qué no votarán al personalismo”, “El Día” enumera una serie de causas, de las cuales voy a extraer cinco o seis. Dice que no votarán a los candidatos del grupo de Batlle Berres, entre otras cosas, por esto:

“Por lo que hizo en los Ferrocarriles, desquiciándolos completamente; porque cargó el presupuesto con dieciocho mil empleados públicos más, por otra parte innecesarios; porque desquició el Correo; porque abandonó durante siete años la conservación y mejoramiento de la red vial, malversando más de cuarenta millones de pesos del Fondo de Vialidad, destinándolo a montar la máquina electoral que mueve al personalismo; porque desorganizó y anarquizó con su paracaidismo politiquero a un gremio tan bien conceptuado y tan digno como el ferrocarrilero; por haberse valido de un gran principio batllista, como es el de la nacionalización de algunos servicios públicos, para desnaturalizarlo y desprestigiarlo con su actividad repudiable en los ferrocarriles, utilizándolos para descargar sobre su presupuesto miles de compromisos electorales, dispensando verdaderas canonjías a figurones del régimen momentáneamente sin destino; por haber postergado y desconocido los derechos de más de 5.000 funcionarios de esos ferrocarriles; por haber creado un clima de escepticismo en el pueblo con una sobreestimación de la “influencia”, como sólo se conocía en el país antes que Batlle y Ordóñez impusiera las severas normas de su política administrativa”.

He elegido algunas de las causas que el batllismo de la 14 invoca para sostener que no serán votadas por sus correligionarios las listas de la 15.

Y ahora, para terminar esta evocación de antecedentes, voy a describir objetivamente, con elementos extraídos, fundamentalmente, de “Acción” y “El Día”, pero también con algunos que voy a

aportar, una incidencia producida en estos últimos días en torno a una acusación del diario “El Día”.

El domingo 8 de agosto —el domingo pasado— “El Día”, en la página 7ª, 4ª columna, publica un suelto titulado “Promesas y antecedentes”, en el que se afirma lo siguiente: “Se dice que brigadas personalistas recorren los barrios de Montevideo, invitando a la gente a jubilarse. Se asegura un trámite rápido y goce inmediato de la pasividad. Todo, claro, mediante el voto por los candidatos de esa fracción. También se estaría prometiendo a los jubilados mejoras de toda clase. El cuento es claro. En el primer caso, nunca terminaría un trámite antes del 28 de noviembre próximo. En el segundo, recuerden los jubilados que antes de esa fecha no se puede, por impedirlo la Constitución, modificar ninguna pasividad o sueldo”.

El mismo domingo 8, por la tarde, contesta “Acción” con un suelto que titula “Estupidez”. Niega radicalmente el cargo; dice que eso no es juego limpio, etc. Y agrega:

“Queda de cuerpo entero una forma de hacer prédica política y de enfrentar la lucha”. Dos días después, “El Día” se hace eco de la respuesta de “Acción” el 10 de este mes, en un suelto que titula “Aclaración útil”, se lee este párrafo: “Lo que nos han dicho numerosas personas y lo sabe todo Montevideo, es que grupos organizados de personas recorren los domicilios de quienes tienen expedientes en trámite, ofreciéndoles sus servicios y prometiéndoles rápido andamiento a cambio de adhesiones a la causa personalista”.

Y digo yo ahora: el batllismo de la 14 no tiene mucho derecho a hacer este cargo al batllismo de la 15, porque yo tengo aquí en mis manos un volante distribuido por el Club “Batlle-Berreta-Mayo Gutiérrez”, de las 18ª y 24ª Secciones; ofrece muchas cosas, y entre ellas, éstas: “Nuestro Club atiende gratuitamente durante todos los días de la semana de las 18 a las 20 horas, gestiones ante las Cajas de Jubilaciones —Servicios Domésticos, Rurales, Pensiones a la Vejez— y cualquier trámite ante oficinas públicas”. Y siguen otros ofrecimientos, éste sorprendente —cosa que yo había visto en un Club blancoacevedista de la calle Andes— de asistencia médica gratuita.

(Murmillos. Hilaridad.)

—Yo me pregunto, no sin cierta indignación, ¿cómo puede prestarse —y me remito a los colegas que se sientan en esta Cámara— asistencia médica en un Club político? ¿Esto no es explotar en forma indignante los dolores y las necesidades de la población modesta?

(Interrupción del señor Representante Lepro.)

—Pero todavía voy a agregar un último elemento de juicio en esta exposición dedicada a la lucha interna del batllismo, demostrativa de la corrupción política. Este último elemento de juicio, tiene que ver con las elecciones de Rivera.

Los señores Diputados conocen todo lo que en los dos campos del batllismo se ha dicho, todas las acusaciones recíprocas que se

han hecho en esta materia. Pero tengo aquí en mi poder una carta que me ha escrito un vecino de Rivera, persona de mi total confianza moral, en la que me expresa algunas cosas que la Cámara debe conocer y que también son probatorias de mi afirmación del otro día. Dice entre otras: "Le envío datos que pudieron ser apreciados por el enviado del Ministro del Interior, señor Ismael Kenny, quien elevó un informe que aun no se ha hecho público. Antes de la llegada del señor Kenny funcionaban una ruleta y juegos de monte y gofo en las siguientes casas: pensión "Doña María", bar y restorán "Danubio Azul" y Casa del Empleado. Las dos primeras, a menos de 25 metros de la parada policial de la Línea Divisoria y la calle Sarandí. La Casa del Empleado está en pleno centro, en la calle Sarandí entre Figueroa y Paysandú. Esto era público y notorio. Parodiando la canción, podría decirse que "todo Rivera lo sabía". Además, se jugaba a la taba en todos los clubes políticos".

"El propio día de las elecciones, el señor Kenny pudo comprobar lo siguiente: primero, la activa participación llevando volantes, del Oficial Inspector Francisco Mello, quien, desconociendo quién era el señor Kenny, se acercó para conversar con la persona que lo acompañaba, pudiendo escucharse esta conversación:

"Mirá: hace dos meses que tenemos la Jefatura. Si hiciera un año, los robamos..."
(Hilaridad.)

"Y en ese estilo siguió comentando la participación descarada de la Policía en las citadas elecciones.

"Segundo, el Comisario señor Besio Gil, con el ayudante Seguí, participando activamente en el transporte de votantes. El segundo Comisario, Corintio Safón en su auto, cargando votantes. Juego de taba en el cantón de la 20ª, en Tangarupá y Brasil. Lo mismo que en el de la 15ª. Todo esto debe estar en el informe del señor Kenny. Ahora, hay algo que él no supo pero que pudimos ver: se pidió el auto a una prostituta muy conocida aquí" —y aquí viene el nombre de las personas y las características del auto— "el que manejado por el agente policial señor Dorsa, de particular, llevaba votantes".

(Interrupción del Diputado Lepro.)

Sr. CARDOSO. — Yo no sé a qué tres personas se refiere el señor Diputado Lepro. En lo que se refiere al ciudadano que firma esta carta, me basta que ella sea firmada por él para que asegure que estos hechos son absolutamente exactos...

(Muy bien.)

—... y que los que los desmienten —como el señor Diputado Lepro— faltan a la verdad.

(Aplausos en la Barra. Interrupción del señor Representante Lepro. Campana de orden.)

Sr. PRESIDENTE. — A la Barra le está prohibido hacer toda clase de manifestaciones.

Puede continuar el señor Diputado Cardoso.

Sr. CARDOSO. — Desde luego, yo que lo conozco un hombre de conducta intachable e insospechable, no dudo ni por un instante de que se hará plenamente responsable de lo que dice cuando sea llamado a ratificarse, en cualquier sitio y ante quienquiera que sea.

Sr. LEPRO. — ¡Va a hacer un papelón!

Sr. CARDOSO. — El papelón lo está haciendo el señor Diputado.

(Interrupción del señor Representante Dubra. Campana de orden.)

Sr. CARDOSO. — Decía, señor Presidente, que de todo esto surge algo indiscutible, que es el uso de procedimientos corruptores de la conciencia cívica y del ambiente político.

Esto es grave —siempre es grave; pero es más grave cuando ocurre en el partido que está en el Gobierno y que aspira a retener el Gobierno. Los partidos son órganos de la opinión pública: la expresan, pero también la forman o, como en este caso, la deforman.

Señor Presidente: en este clima, ¿cómo puede extrañar que la utilización electoral de la Administración Pública, con todo su cortejo de repartos y de corrupción política y administrativa, adquiera crecientes proporciones?

EN LAS CAJAS DE JUBILACIONES FUNCIONAN COMITES ELECTORALES PAGADOS CON LOS DINEROS PUBLICOS. COIMAS ELECTORALES Y DE LAS OTRAS

Llegado a este punto, mientras preparaba mis apuntes, he dudado por qué oficina pública empezar; tan larga es la lista que aquí podría exponerse. Pero he elegido a las Cajas de Jubilaciones. Creo que ellas merecen este lugar de preferencia.

Los señores Diputados saben a qué grado ha llegado la corrupción política, la explotación electoral de las pasividades. Yo, pues, no me voy a detener largamente en este punto; voy a limitarme a recordar —porque todos lo saben— lo que podríamos llamar el "modus operandi".

El "modus operandi" comienza con la elección de los Directores, para los cuales, salvo excepciones, no se designa a los más capaces, sino a aquellos que sean representantes políticos de un sector o de un caudillo.

Por ejemplo, en este momento, el Directorio de la Caja de Jubilaciones de la Industria y el Comercio, está integrado por un batllista de la 14, un batllista de la 15, un blancoacevedista, un

herrerista ortodoxo, digamos, y un herrerista del Movimiento Popular Nacionalista, heterodoxo...

(Murmillos.)

—Creo que el Directorio de la Caja Civil es más o menos igual.

Sr. FERRER SERRA. — No, señor Diputado.

Sr. CARDOSO. — Apenas instalado el Directorio, ¿qué hace cada uno de los Directores? Instala, a su vez, un comité electoral en la Caja de Jubilaciones. Se le llama Secretaría o Secretariado. Es un comité electoral. ¿Costeado por quién? ¿Costeado por el Director? No; costeado con los dineros públicos, porque esos funcionarios —cada Director tiene ocho o diez secretarios— son extraídos de las distintas dependencias de la Caja; son funcionarios —algunos capaces— quitados del trabajo útil de la oficina. Y este comité electoral tiene como finalidad principal atender, los días que corresponde, cientos, cientos y cientos —se me ha dicho que hay días en que el Secretariado de un solo Director atiende doscientas personas— de postulantes; son los recomendados de los clubes políticos, de los caudillos, de los legisladores amigos, etc. Y este comité está encargado, además, de despachar una cantidad de cartas a los cuatro puntos cardinales, destinadas a los intermediarios, a los caudillos, a los postulantes, etc., quedando así instalada una malla de la cual sale una realidad inevitable: el negocio del expediente, la proliferación de la coima. Todos saben que allí prolifera la coima, a la sombra propicia de esta malla de estructura politiquera.

A veces, por lo menos en lo que respecta a los Directores —si tuviera pruebas de otra cosa, lo diría en este momento— la coima es solamente electoral; y en este aspecto la competencia ha llegado a un alto grado de perfeccionamiento. Por ejemplo: un Director de una de las Cajas, que ahora no integra el Directorio, aplicaba el siguiente procedimiento: terminada la reunión del Directorio, aprobada la etapa final de un expediente de pasividad, el correspondiente Secretariado tomaba la lista y hacía llegar a cada uno de los postulantes cuyo trámite había terminado, una carta firmada por el Director, diciéndole más o menos esto: "Tengo el agrado de comunicarle que por mi empeño propio" o "por interés que yo he puesto, su expediente ha sido despachado en el día de hoy"... etc., etc.

Sr. UBILLOS. — Todavía se hace

Sr. CARDOSO. — El señor Diputado Ubillos dice que todavía se hace; de manera que el Director ha hecho escuela.

(Murmillos.)

—Ultimamente —y cito este hecho porque tiene, me parece, un valor y un significado importantes—, a raíz de una denuncia de coima —no sé si coima personal o coima política, porque también se me ha dicho que el dinero lo entregaba una empresa para un club batllista, o para un club de una tendencia batllista, denuncia que, según se me ha dicho, fué hecha por un ex-gobernante

—el Presidente de la Caja de la Industria y el Comercio ha tenido que desprenderse de algunos funcionarios allegados a su oficina, Secretario y portero, los cuales creo que están en uso de licencia.

Pero ante este hecho me hago estas preguntas: ¿era necesaria la denuncia para tomar medidas?: ¿es posible que un funcionario modesto de la Presidencia de la Caja haya llegado a tener, como tiene ahora, varias propiedades inmuebles, sin que los jerarcas se hayan dado cuenta de lo que estaba ocurriendo?: ¿puede ocurrir esto, sin tolerancia de los Directores de la Caja? Esto es lo que no puedo concebir.

Sr. DUBRA. — ¡Apoyado!

Sr. CARDOSO. — ¿Y cuál será el estado de espíritu de los funcionarios correctos, honestos y conscientes de las Cajas de Jubilaciones?

En fin: quiero recordar a la Cámara, que hace poco tiempo el señor Diputado Triay hizo una denuncia, con dedicatoria, para un miembro del Directorio de la Caja de la Industria y el Comercio, el señor Rizzo Sienra. Voy a leer lo que dijo el señor Diputado Triay: "He tenido el dolor de recibir en mi propia casa una concreta exposición de dos cieguitos que se han venido a quejar por la explotación sufrida por uno de ellos; un despojo, un robo común, de parte de un alto funcionario de la Caja de la Industria y el Comercio". Recuerdo que en aquella oportunidad le pregunté —no tuve la respuesta concreta— si era un alto funcionario administrativo, o directivo. Continúa el señor Diputado Triay: "En su oportunidad, señor Presidente, me referiré a este tema y presentaré las pruebas consiguientes. Entre tanto, solamente sugiero al señor Haroldo Rizzo Sienra" —actualmente candidato al Parlamento por el Partido Herrerista (esto lo digo yo)—, "... profundamente empapado de la circunstancia de que terceras personas, generalmente obtienen más beneficios que los propios jubilados, que se preocupe de incluir en las generalidades de esta ley que propone, o en la ley actual, un articulado, como digo, que permita llevar a la cárcel a estos explotadores comunes de los ciudadanos que tienen necesidad de recibir el apoyo del Estado".

(Interrupciones de los diputados Ubillos y Vidal Zaglio.)

Sr. CARDOSO. — Por último, para terminar con este rápido examen referente a las Cajas, quiero recordar que en el periódico de mi Partido, "EL SOL", hace unos días se ha publicado una denuncia según la cual en la Caja de Jubilaciones Rurales se han hecho dos importantes designaciones, que han beneficiado a dos ciudadanos que justamente también han sido candidatos herreristas al Parlamento. Uno de ellos, habría sido acusado hace unos años de falsificador, y el otro fué uno de los oradores en el acto realizado en Colonia por los peronistas, con la participación del señor Espejo, a quien no pudo acompañar en el barco a su retorno, por haber sido detenido por porte de armas.

EN EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DESIGNACION DE OBREROS, CON VIOLACION DE LA LEY, POR SIMPLE NOTA DEL SECRETARIO DEL MINISTRO. REGALO DE GRANDES SUMAS DE DINERO PERTENECIENTES AL ESTADO

Bien, señor Presidente: esta marcha desenfrenada hacia la utilización político-electoral de las dependencias del Estado, en algunos casos no respeta barreras legales. Parecería que los jefes se sintieran bajo la influencia de un clima de impunidad surgido de las componendas o compromisos políticos.

He aquí un caso, que voy a narrar a la Cámara, ocurrido en el Ministerio de Obras Públicas en estos últimos días.

Hay una ley referente a la distribución de obreros no especializados, ley que reglamenta la forma de tomar obreros en las obras públicas, sean realizadas por contratistas o por administración. La ley establece el funcionamiento de comisiones departamentales de trabajo, la forma de inscripción, las condiciones que deben tener los trabajadores aspirantes, etc. Y bien: en estos momentos hay dos obras públicas de cierta importancia que se realizan en la capital de la República: una, la de la Biblioteca Nacional; otra, las reparaciones de la Casa de Gobierno; ahora bien, puedo asegurar a la Cámara que en estas últimas semanas más de cien obreros han sido enviados a esas obras con una orden escrita, que yo he visto, que he tenido en mis manos, del Secretario particular del Ministro de Obras Públicas.

Yo no sé si esos ciento y tantos obreros están trabajando, pero puedo asegurar a la Cámara que allí han sido enviados, repito, por el Secretario particular del Ministro de Obras Públicas.

Se ha violado abiertamente la ley que establece la necesidad del sorteo y la forma cómo él debe realizarse. Pero, además, como la mayoría de esas personas son recomendadas de los clubes políticos y de los caudillos, muchos no tienen las aptitudes suficientes para trabajar como peones albañiles, y ello puede traer —traerá quizás— como consecuencia segura, que la obra se atrase, que no se cumplan los plazos, que luego no alcance el dinero votado, y que haya que venir al Parlamento a pedir más dinero. ¿Cuál es la causa? La supeditación del interés público al interés politiquero.

Pero, señor Presidente, ya que he mencionado esta obra de la Biblioteca Nacional y al Ministerio de Obras Públicas, voy a hacer en este momento una denuncia muy grave. Esta no ya en el terreno político, sino en el terreno administrativo. Quiero puntualizar que según mis informes este episodio no ha ocurrido durante el Ministerio del ingeniero Acquistapace; sino que es anterior. Es un índice de la desaprensión con que se cuidan y se manejan los dineros públicos. En este caso hay algo más que descuido y desatención: hay algo peor.

Voy a informar a la Cámara, en síntesis, del hecho. Como los señores Diputados saben, a consecuencia de anomalías ocurridas en la construcción de la Biblioteca Nacional, se rescindió el contrato con la empresa constructora COSUCO. La Dirección General de Arquitectura certificó en noviembre de 1952 que cumpliendo una resolución del Poder Ejecutivo, creo que de fecha 30 de setiembre de 1949, procedió y dió término a la liquidación final de las obras contratadas, certificando que la empresa —oigan los señores Diputados— adeuda al Estado —voy a dar cifras redondas— la cantidad de \$ 234.000, y aconsejando que para que el Estado pudiera resarcirse de esa deuda de \$ 234.000, se procediera de la siguiente forma: a) reconocimiento de obras extraordinarias realizadas por la empresa COSUCO, \$ 41.000; b) toma total de la retención del 3 % del importe de los certificados expedidos a su favor, \$ 33.000; c) toma total del depósito de garantía hecho por la Empresa, \$ 13.000. Total, \$ 88.000.

Como advertirán los señores Diputados, quedaba todavía un gran margen por cubrir, nada menos que \$ 146.000, casi \$ 150.000 que el Estado debería obtener por las vías correspondientes, sea la judicial o la que fuere. En febrero de 1953 el Director General de la Dirección de Arquitectura aprueba el informe del arquitecto interventor que aconsejaba proceder de la manera que yo he indicado a la Cámara, y eleva a la superioridad toda la información para su ratificación y su aplicación correspondiente. Pero he aquí que el 5 de agosto de 1953, un Asesor —otro asesor— del Ministro, produce otra información cuya síntesis voy a hacer ahora a la Cámara.

Propone aprobar la liquidación final efectuada por la Dirección General de Arquitectura, es decir, la deuda de \$ 234.000; tomar a la Empresa los \$ 33.000 correspondientes al 3 %; reconocer —a favor de la Empresa— los trabajos extraordinarios comprobados por el Interventor, \$ 41.000. Y ahora empieza lo asombroso: devolver a la Empresa COSUCO los \$ 13.000 del depósito de garantía y perdonarle —éste es el término que corresponde utilizar— los \$ 146.000 que por medios técnicos adecuados se determinó que la Empresa adeudaba al Estado.

El Poder Ejecutivo, por decreto de fecha 19 de setiembre de 1953, aprueba este temperamento y se regala, en suma, a la Empresa con la que hubo que rescindir el contrato, la cantidad de \$ 160.320,48.

La información que motivó este decreto del Poder Ejecutivo no se basa en la afirmación ni en la presunción de que hubiera habido algún error o alguna omisión en el informe del arquitecto interventor. Se invocaron razones de equidad; y por razones de equidad se regalaron, repito, \$ 160.320,48 de los dineros públicos.

(Interrupción del Sr. Diputado Puig.)

Sr. CARDOSO. — Aclaro que este hecho fué conocido por mí

en estos últimos días. Le agradezco la información complementaria al señor Diputado Puig.

Quiero decir ahora a la Cámara que tengo en mi poder, documentada en forma igual a ésta, otra que acaban de oír los señores Diputados, la constancia de una situación similar que se ha producido en la construcción del edificio para el Liceo Zorrilla de San Martín.

Voy a ahorrar a la Cámara el detalle que tengo en mi poder, en seis numerales, sobre cada uno de los cuales existe la documentación correspondiente en el Ministerio de Obras Públicas, y cuya conclusión puede expresarse así: "Todas estas autorizaciones indebidas y, además, el no efectuarse los descuentos correspondientes a la empresa que está construyendo ese edificio, están perjudicando al Estado en varias decenas de miles de pesos". Todo esto, repito, está documentado en el expediente correspondiente del Ministerio de Obras Públicas.

PARA REINGRESAR A ANCAP, LOS OBREROS CESANTES POR LAS "MEDIDAS DE SEGURIDAD" TENIAN QUE PASAR POR UN CLUB BATLLISTA. EXPLOTACION NEGRERA EN "EL ESPINILLAR"

Voy a citar ahora otro ejemplo de inícuo aprovechamiento político, ya no sólo de la Administración Pública, sino de la necesidad de la angustia y quizás del hambre de mucha gente. Me refiero a lo ocurrido con la restitución de los empleados y obreros destituidos de ANCAP.

Recordarán los señores Diputados que el siete de abril del año pasado, la señora Diputado Valverde de Graña formuló en Cámara una denuncia en los siguientes términos: "En el último conflicto" —se refiere al de ANCAP— "como decía, quedaron cesantes alrededor de ciento ochenta funcionarios, algunos fueron reincorporados después de haber sido declarados cesantes. El procedimiento para su reingreso, según las denuncias concretas que tengo, es el siguiente: después de haber pasado algunos meses de su cesantía, el funcionario que quiere reingresar debe concurrir a un club político que se encuentra ubicado en la avenida Carlos María Ramírez a la altura de Carlos Tellier. Parece que allí concurren el Secretario de un Director de ANCAP, un señor cuyo nombre no se me ha dado hasta el momento y otro señor que también desconozco, y que se me dice que actualmente es Director de la Caja de Jubilaciones y que también fué funcionario de ANCAP". A esta altura se registra una interrupción del señor Diputado Ferreiro Iraola, que dice: "¡Apoyado! Es cierto".

Más adelante, continúa la señora Diputado Valverde de Graña:

"Allí se haría el camino para que pudiera hablar con los Directores de ANCAP". "Señor Ferreiro Iraola. Con algunos Directores". Sra. Valverde de Graña. Luego serían propuestos por el citado Director. Estas son las denuncias que tengo, señor Presidente. De ser cierto estos hechos, yo no encontraría palabras para calificarlos, y no creo que las haya en el diccionario ni en nuestro lenguaje".

La versión registra: "Apoyados". Prosigue la señora Diputado Valverde de Graña: "Entiendo que el Directorio de ANCAP está en la obligación, en la gran obligación de hablar claro de este asunto, y si estas denuncias que tengo en mi poder son ciertas o no, el Directorio de ANCAP debe decirlo. De ser cierto, señor Presidente, no quedaría muy bien para su moral".

Muy poco tiempo después, mi compañero de sector, señor Diputado Dubra, se ocupó de este asunto con datos más concretos. Fué en el curso de un debate dialogado con el señor Diputado Batlle Pacheco; por eso este señor Diputado aparece citado en las palabras del señor Diputado Dubra.

Dijo mi compañero de sector: "Hay algún club de la fracción política de que es líder el señor Diputado Batlle Pacheco, situado en la calle Laureles y José Castro, cuyos animadores son el actual Secretario del Presidente del Directorio de ANCAP, señor Dios, y el señor Antúnez, ex Secretario del Ingeniero Fabini. A través de la filiación de este club pudieron conseguir que fueran readmitidos muchos obreros y muchos empleados que se mantenían arbitrariamente al margen de sus actividades normales".

Sr. FABINI. — ¡Eso es falso!

Sr. CARDOSO. — ¿Qué es lo falso?

Sr. FABINI. — Eso que usted acaba de decir.

(Campana de orden.)

Sr. CARDOSO. — El señor Diputado FABINI dice que esta acusación es falsa, y yo digo que es verdadera.

(Apoyados.)

Sr. FABINI. — ¡Y yo digo que es falsa!

Sr. CARDOSO. — ¡Usted dice que es falsa y no dice la verdad!

(Interrupción del señor Representante Fabini. Campana de orden.)

—Señor Presidente: no sé lo qué ahora dijo el señor Diputado Fabini bajo el ruido de la campana.

Admito que él crea sinceramente lo que dice: soy muy respetuoso del afecto filial.

(Interrupción del señor Representante Fabini.)

—Repito que admito que él crea sinceramente que eso es falso; le hago ese reconocimiento...

(Interrupción del señor Representante Fabini. Campana de orden.)

—... pero no solamente yo, sino muchos Diputados aquí presentes...

(Apoyados.)

—... —he nombrado a dos: la señora Diputado Valverde de Graña y el señor Diputado Ferreiro Iraola— sabemos que esto es exacto.

Sr. FABINI. — Han sido engañados.

Sr. CARDOSO. — ¡No sea inocente!

(Interrupción del señor Representante Fabini. Campana de orden. Respuesta del orador.)

Sr. DUBRA. — ¿Me permite una interrupción, señor Diputado Cardoso?

Sr. CARDOSO. — Sí, señor Diputado.

Sr. PRESIDENTE. — Puede interrumpir el señor Diputado.

Sr. DUBRA. — Comprendo, señor Presidente, que el señor Diputado Cardoso haya traducido con certeza la situación en que se encuentra el señor Diputado Fabini. Hay deberes filiales que obligan moralmente a creer o tomar como verdad revelada todo aquello que tiene una atingencia directa con nuestro padre.

(Interrupción del señor Representante Fabini.)

—Pero en este caso, señor Presidente, se han hecho ya al señor Diputado Fabini todos los reconocimientos en ese orden de cosas, y todo lo demás que diga el señor Diputado Fabini no es, o no va a resultar, otra cosa que parte de una técnica con la que se va a pretender...

(Interrupción del señor Representante Carbonell y Migal. Campana de orden.)

—... sin éxito de ninguna especie, acallar la exposición que se está haciendo por parte de nuestro sector.

(Interrupción del señor Representante Carbonell y Migal. Campana de orden.)

—Esa es la verdad. Esa terminología que pretende ser gruesa, que se está utilizando desde el sector batlista no va a modificar absolutamente nada nuestra línea de conducta: vamos a decir todo lo que tenemos que decir.

Sr. CARDOSO. — Para cerrar este episodio, señor Presidente, quiero decir que este hecho, como otros que yo he expuesto y que expondré en adelante, pueden ser averiguados por la Cámara si lo desea. En cuanto a este hecho concreto de la toma de destituidos en la ANCAP, ofrezco desde ya testimonio de numerosas personas que estarían dispuestas a ratificar mi denuncia. Y recuerdo que hace unos minutos he expresado ante esta Cámara que por lo menos dos legisladores han afirmado —consta en la versión taquigráfica— que esto es exacto.

Señor Presidente: ya que me refiero a ANCAP, quiero recordar que hace un tiempo hice un pedido de informes sobre irregularidades, violaciones legales y constitucionales ocurridas, según mis noticias, especialmente en El Espinillar. No he tenido respuesta, cosa que no es de extrañar. La ANCAP contesta tarde, mal o nunca —es una especie de feudo, de República apar-

te—, a los pedidos de informes de los señores Diputados y si no que lo digan los señores Diputados Solares y Trianón, que creo que no han obtenido respuesta, a los pedidos de informes hechos por ellos y reiterados por la Cámara.

Pero en una forma un tanto indirecta vengo a obtener respuesta a uno de los puntos sobre los que yo preguntaba en mi solicitud de informes: el de la intolerable situación en que ANCAP ha colocado a los obreros destajistas que trabajan en El Espinillar. Situación intolerable desde el punto de vista legal, porque no sé en nombre de qué facultades legales ANCAP puede hacer trabajar en sus predios propios, por intermedio de concesionarios y con violación de normas humanas. En efecto, tengo en mi poder el informe de la Comisión de estudio de las condiciones de trabajo de los arrozales y plantaciones de caña de azúcar, integrada por delegados de diversos Ministerios que refiriéndose a este punto, a esta irregularidad, establece lo siguiente: "El contratista toma a los obreros y lo más que les paga es \$ 0.55 por surco. Es decir, que este señor contratista, que la ANCAP fomenta y protege, gana a costa del obrero, sin trabajar, \$ 0.25 por surco. Este contratista tenía treinta obreros trabajando. Calculando que cada obrero hiciera ocho surcos por día, a un promedio de \$ 0.20 por surco, le succionaba a cada obrero \$ 1.60 por día y a los treinta obreros \$ 48.00 en un solo día. Pero aquí no para la acción de estos contratistas. Poseen una cantina —y hay una fotografía de esto— donde se vende a los obreros los artículos necesarios para su existencia. De tal manera que cuando llega al final de la quincena o al final del mes, a veces no tienen nada que cobrar o están debiendo a la cantina del concesionario".

Quería traer a colación esta belleza del régimen administrativo de ANCAP.

NO SE RESPETA NI LA SALUD DE LAS PERSONAS EN EL APROVECHAMIENTO POLITICO ELECTORAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

En este desfile de organismos, donde se producen irregularidades y aprovechamiento político electoral de la administración, naturalmente no podía faltar Salud Pública. Y yo digo con respecto a Salud Pública que las cosas, en cuanto a esta cuestión que estamos tratando, siguen igual o peor que antes. Las promociones del personal afectado al cuidado directo de los enfermos se hace en gran parte con violación de leyes, reglamentos y calificaciones, de acuerdo con las influencias políticas. Las designaciones del mismo personal —salvo algunos casos en que sé que se ha designado a personas que hacen honorariamente los cursos de preparación en los

hospitales—, se han hecho con los recomendados de los caudillos o de los amigos políticos.

Es un hecho notorio que el subsecretario de Salud Pública, doctor Tammaro, prácticamente no cumple otra función que ésa. Podemos decir que el doctor Tammaro está en el Ministerio de Salud Pública para emplear a sus amigos políticos, a los recomendados, etc., naturalmente que en conexión directa, podemos decir que es allí un plenipotenciario, con el doctor Blanco Acevedo.

De acuerdo con informes de personas muy serias, podemos decir que el despacho del doctor Tammaro es un Comité electoral del Partido Blanco Acevedista.

(Interrupción del Sr. Diputado Blanco Acevedo.)

Sr. CARDOSO. — Señor Presidente: empiezo por decir, contestando esta interrupción un tanto festiva —lo digo sin ánimo de molestar al señor Diputado Blanco Acevedo—, que naturalmente no critico que el doctor Tammaro reciba a sus amigos en su despacho en el Ministerio. Lo que he dicho es una cosa absolutamente notoria: que en Salud Pública, con criterio general —ya dije que hay algunas excepciones— las designaciones del personal afectado al cuidado de los enfermos se hace, no en función de su capacidad, sino de las recomendaciones políticas. Y además, que también es notorio que el despacho del doctor Tammaro no está solamente afectado a amables tertulias de este señor subsecretario con sus amigos, sino que allí concurren los caudillos del blancoacevedismo en forma asidua, común, casi diaria, seguramente que no para resolver los problemas asistenciales, me imagino yo.

Y finalmente, para no demorar más en este aspecto planteado por el señor diputado Blanco Acevedo, destaco el fácil procedimiento que señala para terminar con esto: cambiar así, de un día para otro, la composición del Consejo de Gobierno, declararnos miembros de él los socialistas. Confío que algún día eso llegará, pero yo preferiría que por ahora se siguiera otro camino, y es terminar con esta corrupción en las designaciones que se hacen en el Ministerio de Salud Pública.

Sr. DUBRA. — ¡Muy bien!

(Interrupciones de los diputados Cartolano y Mattos.)

Sr. CARDOSO. — Continúo, señor Presidente.

El punto a que se ha referido el señor Diputado Mattos, es distinto al que yo he señalado; él ha hecho mención al acierto o desacierto de las Comisiones Calificadoras. Ojalá que aunque a veces hubiera errores, las promociones fueran hechas de acuerdo con los dictámenes de las Comisiones Calificadoras. Lo que ocurre es que, en muchos casos, esos dictámenes no son seguidos.

(Interrupciones de los Sres. Representantes Mattos y Cartolano.)

—Desde que integro esta legislatura —hace dieciséis años— tengo gran preocupación por Salud Pública. He realizado cuatro o cinco

interpelaciones a distintos Ministros; he tratado de conocer sus problemas y sus mecanismos.

Cuando hace unos años viajé a Europa y tuve oportunidad de estudiar en Gran Bretaña la nueva organización de los servicios de medicina, al visitar varios hospitales pregunté a sus directores si ahora que el servicio estaba nacionalizado, socializado en gran parte, no notaban ellos que se hiciera sentir la influencia del Estado en el sentido de que el factor político pudiera intervenir en la selección del personal destinado al cuidado de los enfermos. Formulé una vez la pregunta; no me entendieron. La formulé una segunda vez, y tampoco me entendieron. ¡No podían concebir que la influencia política se aplicara para elegir nurses, enfermeros o guardianes de hospital!

(Apoyados.)

—Pero aquí, en nuestro país, lo que no entienden es otra cosa; lo que no entienden es que hacer eso que están haciendo, además de corrupción es un atentado contra la salud humana y la organización sanitaria del país.

(Apoyados.)

Por eso es que pongo calor en estas cosas, y no podía callar, en este desfile que estoy haciendo ante la Cámara, conociendo —como conozco, los hechos, la verdad indiscutible de que en el momento actual, en una gran cantidad de casos, en Salud Pública—, señores para los hospitales, señores, se siguen haciendo designaciones, no por razones de eficiencia, sino con criterio de recomendación política.

(Muy bien. Apoyados. Aplausos en la barra.) (Campana de orden.)

SE REPARTEN LOS GUARDIACIVILES EN PROPORCION A LOS INTEGRANTES DE LA MAYORIA DEL CONSEJO NAL. DE GOBIERNO. PRUEBA DOCUMENTADA

Sr. CARDOSO. — Esta exposición va resultando demasiado extensa, y tengo que tratar casos de un volumen y de una gravedad mucho mayor que los que hasta ahora he abordado.

Pero antes de dejar este capítulo del aprovechamiento político electoral de la Administración Pública, quiero recordar a la Cámara un hecho que todos conocemos, pero que puede ser que se olvide, porque es necesario decir —y aprovecho esta oportunidad para decirlo— que hay un clima especial, un clima que yo llamaría de anestesia: parece que todos nos estuviéramos acostumbrando a esto, parece que se estuviera considerando como cosa normal, correcta, aceptable, esta industrialización política de la Administración Pública.

Quiero recordar que el 6 de noviembre de 1952, el subsecretario del Ministerio del Interior, doctor Crespi, dirigió una carta al Jefe de Policía de Rivera, reprochándole la forma en que había realizado un reparto de guardias civiles designados con motivo de las medidas prontas de seguridad. Voy a leer lo sustancial de esa carta, para que quede incorporada a los anales legislativos como una demostración más de la realidad que el país está viviendo.

"Debo expresarle" —decía— "que sus explicaciones no son satisfactorias, en cuanto no establecen el cumplimiento de las instrucciones generales dadas por el señor Ministro para las designaciones, esto es, tratar a todas las parcialidades de la mayoría del Consejo con equidad". Había que repartir los guardias civiles en proporción al número de consejeros colorados.

Continúa diciendo: "En el caso de esa Jefatura, se han recibido quejas, al parecer fundadas, sobre la prescindencia de determinada importante fracción del Partido..." —me imagino que será la fracción del señor Ministro—...

(Murmullos.)

"... en los nombramientos últimamente realizados con motivo de las medidas extraordinarias. 2º) A fin de poder esclarecer la parcialidad que se denuncia, sería del caso que usted remitiera la nómina de las altas dadas con ese motivo, caracterizando en lo posible el origen de las designaciones". Es decir, quién había sido el que había recomendado al candidato a guardia civil.

"3º) Llama además la atención en su carta que se haya confiado a la Comisaría de la 1ª Sección el llamado de ciudadanos para los cargos, cuando existen otros medios más indicados de proveer las vacantes, que contemplen mejor las instrucciones recibidas". Las "instrucciones recibidas" eran las del reparto de acuerdo con la composición de la mayoría del Consejo Nacional de Gobierno.

(Apoyados.)

Naturalmente que, a mí, esto no me extrañó mucho porque ya conocía el episodio de Salto. En efecto, en Salto también, con motivo de las medidas prontas de seguridad, se incorporaron, según datos que no he refrescado totalmente, pero que creo que son bastante aproximados, se incorporaron algo así como 48 guardias civiles, y esas incorporaciones se producían automáticamente, de acuerdo con los envíos que a la Jefatura hacía cada grupo político colorado. Así, se adjudicaron 16 plazas al blancoacevedismo, 16 al batllismo catorcista y 16 al batllismo quincista; pero como dentro del batllismo de la 15 de Salto hay dos tendencias, les tocaron ocho guardias civiles a cada una.

(Interrupciones. Murmullos.)

UN EJEMPLO TIPICO, EN LA COMISION DE SUBSISTENCIAS, DE COMO CUNDE ESTE CONCEPTO CORRUPTOR: LO QUE VALE EN FUNCIONARIOS ES LA INFLUENCIA POLITICA Y NO LOS MERITOS FUNCIONALES

Señor Presidente: conociendo estos hechos —y la lista podía ser mucho más larga— y conociendo este ambiente, no puede producir extrañeza que en la masa de funcionarios, que ve el ejemplo que le viene de arriba, que ve la corriente corruptora que le viene de arriba, cunda el concepto también profundamente corruptor de la función pública según el cual lo que vale para obtener una mejora o para defender una posición, es la influencia política y no los méritos funcionales.

Y he aquí un episodio demostrativo de la extensión de esa enfermedad maligna, de ese concepto extendido en el funcionariado, de que lo que vale es la muñeca y no el mérito en el trabajo de la administración pública. Tengo aquí en mi mano un memorándum mimeografiado —sé que varios señores Diputados batllistas lo tienen, así se me ha asegurado— distribuido por veintinueve inspectores batllistas dependientes de la Comisión Nacional de Subsistencias. Ese memorándum se titula: "Acción Política del Partido Blanco Herrerista en el Consejo Interventor de Subsistencias". Estos veintinueve inspectores batllistas se quejan de que cierta influencia o predominancia herrerista en el Consejo interventor los perjudica. De esto no tengo pruebas y no puedo ocuparme de ese aspecto en este momento. Lo que interesa es lo que dicen ellos, los presuntos perjudicados sobre su propia situación. Dicen lo siguiente: "Después de despojar de su cargo al Inspector General señor Américo Tabárez para sustituirlo por un blanco, ahora destruyen lo que los herreristas llaman un nido batllista. Este grupo de veintinueve inspectores representa más de mil votos, que si se les respeta, acompañan al batllismo. Algunos de ellos tienen clubes, y son los siguientes". Y aquí dan los nombres. Como es una cosa pública, yo lo voy a leer.

"Faustino y Raúl Rey, convencionales de la Agrupación Labor y Cultura, que en la 20ª Sección, 13ª, 14ª y 21ª, en una elección general aportan dos mil votos al batllismo. José Comesaña, actúa en el fuerte club batllista de su hermano, Juan Antonio Ríos, tiene club batllista con muchos delegados. José Vigorito, tiene club batllista con varios delegados. Mario Pose, importante club batllista. Pedro Otero, importante agrupación batllista con delegado de la cual es Presidente. Américo Valillo, preside agrupación batllista con varios delegados".

"Podría agregarse —continúa el documento— "que el resto de los inspectores están todos vinculados a agrupaciones batllistas, y

con gran arrastre político, pues actuaron presidiendo mesas receptoras en las últimas elecciones generales e internas”.

De manera que para hacer valer su derecho o su presunto derecho, no se exponen méritos, no; eso no interesa; lo que interesa son las influencias electorales. Yo pregunto ¿es esto corrupción política o no es?

(Aplausos en la barra. Campana de orden).

EN LA ADMINISTRACION DE LOS FERROCARRILES: VIOLACION DE LA LEY, IRREGULARIDADES, INJUSTICIAS, PARACaidISMO. ¿COMO VAN A ARREGLAR ESTO LOS PARTIDOS DEL GOBIERNO?

Todavía, y lamentando que esta exposición se vaya haciendo muy extensa, antes de entrar a esos capítulos de mayor gravedad y volumen, uno de ellos, sobre todo, de extraordinaria gravedad, el que se refiere al Banco de la República y al Contralor de Exportaciones e Importaciones, tengo que decir dos palabras de la Administración de los Ferrocarriles del Estado.

No voy a detenerme mucho en esto porque es objeto de una investigación en el Senado, pero sólo quiero hacer algunas comprobaciones, sacar una consecuencia y formular unas preguntas. Las comprobaciones son éstas: se ha violado abiertamente la ley. Esto no admite ninguna discusión.

No se hizo la clasificación de los cargos previamente a las designaciones, como lo establece el artículo 44 de la Ley Orgánica.

(Apoyados).

No se cumplieron los artículos 43 y 44, que establecían la necesidad de fijar grados, categorías y sueldos de los funcionarios...

(Apoyados).

...artículos 43 y 44 expresamente ratificados por el artículo 14 de la Ley de Recursos. De manera, pues, que la ley ha sido violada doblemente; es decir, han sido violadas dos leyes: la Ley Orgánica y la Ley de Recursos.

Y frente a esto, como fué denunciado en el Senado, hubo aumentos para funcionarios que alcanzaron a seiscientos y setecientos pesos mensuales, en tanto que otros, con treinta y cinco y cuarenta años de antigüedad, sólo tuvieron aumentos de veinte y treinta pesos mensuales.

Además de esto, al paracaidismo por méritos políticos, denunciado reiteradamente con toda la responsabilidad de las entidades gremiales de funcionarios y obreros del Ferrocarril; esa multiplicación pasmosa de ingenieros que, por ejemplo, donde había tres o cuatro, hay veinte más, no sé exactamente la cifra.

Los otros días —el hecho parecerá pequeño pero es simbólico— he conocido esta circunstancia: en los talleres de Peñarol, mientras

sólo hay dos rosetas en los cuartos de baño para que pudieran bañarse —no pueden hacerlo prácticamente— los ochocientos obreros que trabajan en aquellos talleres, la Administración está construyendo nuevos edificios para ubicar a los funcionarios que no caben en las oficinas.

(¡Muy bien!).

La consecuencia es un clima de descreimiento, de desánimo, de desmoralización en miles de funcionarios...

(Apoyados).

...conjunto de trabajadores realmente ejemplares, cuyo elogio merecido se ha hecho muchas veces en esta Cámara.

Decía que quería formular estas preguntas: ¿cómo va a arreglarse esto? ¿Cómo van a repararse las injusticias y las irregularidades? ¿Qué va a resolver y cuándo la Comisión del Senado y el Senado mismo, integrado con representantes de los mismos partidos que integran el Directorio de la Administración de Ferrocarriles? La gran masa de obreros y funcionarios del Ferrocarril espera la respuesta.

INSTITUTO DEL TRABAJO... O DE LA COIMA. EL CORREO ¿PARA QUE HABLAR? LA NOVEDAD NOVEDOSA: “INSPECTORES DE ARBOLADOS”. RELACIONES EXTERIORES, DONDE LOS VIATICOS GOBIERNAN

Sr. Presidente: voy a interrumpir esta larga lista porque sería extenderme demasiado. Si habláramos, por ejemplo, del Instituto del Trabajo, ¿qué tendríamos que decir? ¿Es que acaso se ha cumplido allí la norma de la Ley Presupuestal según la cual debían llenarse determinadas garantías de eficiencia mínima para el personal inspectivo que se incorpora al Instituto con el fin de asegurar el cumplimiento de las leyes laborales? Las cosas están igual o peor que antes. Hay allí funcionarios honrados —y tenemos especial interés en decirlo— como los había antes, pero todos sabemos cómo reina allí la institución de la coima.

Pero ¿es que necesita ser probado? ¿Qué diputado presente no sabe que en el Instituto del Trabajo la coima es una institución? ¿Alguno se atreve a negarlo?

Las leyes laborales no se cumplen, principalmente porque el contralor no existe. Las cosas han cambiado; hay más personal, incluso, entre ellos, hombres y mujeres honrados; pero también hay más coimeros que antes.

Si habláramos del Correo, allí los robos repetidos —no un hecho aislado, porque funcionarios desleales pueden haber en cualquier parte— nos comprueban que la enfermedad es endémica: desquicio administrativo, favoritismo, paracaidismo, etc.

He aquí un dato que no voy a omitir, que me fué entregado anoche por una persona de toda mi confianza y de toda responsabilidad. Es una cosa un tanto pintoresca lo que ocurre con algunos funcionarios de Obras Públicas que se llaman inspectores de arbolado, inspectores para cuidar los árboles, creo que serán. Estos inspectores, en gran parte por lo menos, no cumplen sus funciones; cobran sueldo del Estado y trabajan para los clubes políticos correspondientes.

En Canelones varios de ellos son caudillos batllistas. Eso también es notorio. Tengo aquí los nombres, pero no los daré en este momento. Uno, es caudillo del Tala; otro fuerte caudillo de Migueles; otro es un caudillo que actúa muy cerca del Intendente de Canelones. Ninguno de ellos —me dice esta persona responsable— hace absolutamente nada como Inspector de Arbolado; trabajan permanentemente como caudillos de propaganda de su partido, especialmente los dos primeros. Agrega que las respectivas poblaciones pueden dar fe de que esto es rigurosamente exacto.

En fin; si fuéramos a examinar el favoritismo y los acomodos del Ministerio de Relaciones Exteriores... (Apoyados).

...al que ya me referí al comienzo de esta exposición, ese juego de viáticos cuantiosos para instalarse en el extranjero, y luego, la vuelta y la declaración en "misión activa" en Montevideo para seguir cobrando aquí como si estuviera en el extranjero; el caso de los cónsules honorarios que en realidad, no son tales, porque cobran como medianeros del Estado una parte de los recursos consulares y pueden dedicarse a otras actividades, mientras que una cantidad de cónsules de carrera se encuentran aquí en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se me ha narrado el caso de un cónsul honorario sobre el que pesan graves denuncias de irregularidades en dos destinos anteriores, que vino a Montevideo, y merced a influencias poderosas obtiene un destino mucho más ventajoso que el que tenía antes, en la ciudad Del Cabo.

UN DESAFIO AL DIPUTADO CESAR BATLLE PACHECO

Sr. Presidente: voy a dar por terminado, por el momento, este aspecto de mi exposición para ocuparme de otros asuntos a los que considero de una gravedad que no podrá ser discutida por la Cámara.

(Interrupción del diputado Batlle).

Sr. CARDOSO. — Señor Presidente: solamente voy a referirme a las últimas palabras del señor Diputado Batlle Pacheco; las otras son —perdóneme señor Diputado— el disco que ya muchas veces le hemos oído por lo que no vale la pena tomarlas en cuenta.

Pero, en cuanto al Hospital de Clínicas y al Socialismo, concretamente voy a decir lo siguiente: desafío al señor Diputado Batlle Pacheco públicamente, aquí en el seno de la Cámara, para que traiga —puede tomarse el plazo de todos los días que quiera: 8, 10, 12 o 15 días— las pruebas de que el Decano de la Facultad de Medicina, doctor Mario Cassinoni hizo algún caso de favoritismo en las designaciones del Hospital de Clínicas.

Sr. DUBRA. — ¡Muy bien!

(Aplausos en la Barra. Campana de orden).

Sr. CARDOSO. — Lo desafío a que traiga un caso más de aquellos 6 ó 7, en un total de varios centenares de ciudadanos, de filiación socialista, que integran el personal del Hospital de Clínicas. Y si el señor Diputado Batlle Pacheco, al cabo de ese plazo prudencial, no trae la prueba de lo que ha dicho, quedará demostrado que ha faltado a la verdad.

(Muy bien!)

(Interrupción del Sr. diputado Batlle).

Sr. CARDOSO. — Para terminar esta incidencia.

Quiero decir que si el señor diputado Batlle Pacheco en un plazo prudencial no trae las pruebas de la acusación que ha hecho, yo le recordaré su omisión aquí y en las tribunas públicas.

UN SENADOR, CUYAS ACTIVIDADES DEBIAN ACARREARLE LA PERDIDA DEL CARGO LEGISLATIVO... SIGUE EN EL SENADO

Sr. Presidente: antes todavía de entrar a los capítulos que anuncié, y para matizar un tanto esta exposición, voy a pasar del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para ocuparme de la situación de un senador cuya conducta debió haberle acarreado, según lo dispone la Constitución de la República, la pérdida inmediata del cargo legislativo. Me refiero al Senador Aquiles Espalter.

Hace un tiempo, en las columnas de El Sol, órgano de mi Partido, se formuló contra este Senador una acusación en los siguientes términos: "Ha llegado hasta nosotros la información fehaciente de que en un juicio por cobro de pesos que se tramita en uno de los Juzgados de lo Civil, un Senador" —no se nombraba entonces, pero yo lo he nombrado: el Senador Espalter— "declaró en el escrito de demanda que después de múltiples gestiones personales suyas logró que el Instituto de Colonización desistiese de adquirir parte de una estancia para cuya compra dicho organismo tenía prioridad, de acuerdo con la ley, y permitiese su venta a una organización capitalista extranjera, con lo cual el Senador habría logrado" —así lo hace constar en el escrito— "un importante beneficio para los propietarios de la estancia, de cuyos bienes era administrador y a los que

pretende cobrar una abultada suma por los servicios prestados" — era, como digo, un juicio por cobro de pesos. "El mismo Senador había declarado posteriormente" —esto entonces era condicional, ahora no es condicional: "declaró"; está en las actas del Senado —"en el Senado que la operación que el Instituto dejó de hacer a raíz de sus múltiples gestiones personales" —esto último, naturalmente, no lo dijo en el Senado— "hubiese sido muy conveniente para los intereses públicos". Es decir, que la operación que dejó de hacerse por sus gestiones personales, según lo dice con su firma, en el juzgado, hubiese sido muy ventajosa para los intereses públicos.

Agrega la información que "la contraparte del juicio señala que la intervención del Senador confesada por él mismo es inadmisibles por estar expresamente prohibida por la Constitución de la República. Esta establece que la inobservancia de lo preceptuado en ese artículo importará la pérdida inmediata del cargo legislativo. "La grave denuncia" —terminaba El Sol— "en los términos en que ha llegado a nosotros, compromete, pues, la conducta de un miembro del Senado y la de los dirigentes de un Ente Autónomo".

Pero no termina aquí la cosa, porque al discutirse en el Senado un proyecto sobre ampliación de las Colonias San Javier y Ofir, mediante la compra de la estancia Farrapos, el Senador Espalter adoptó la siguiente actitud: "En el artículo anterior" —dice El Sol en otro ejemplar— "que sobre este asunto publicamos a comienzos del mes pasado, terminábamos haciendo referencia a otro hecho grave también protagonizado por el mismo señor Espalter. Transcribimos algunas manifestaciones suyas, hechas en el Senado el 29 de Julio de 1951, al tratarse un proyecto de expropiación de tierras para la ampliación de la Colonia San Javier. El Senador Espalter hablaba para oponerse a que en el proyecto que autorizaba la emisión de una deuda de \$ 2.000.000 para la ampliación de las Colonias San Javier y Ofir, se mantuviesen estas palabras "para la ampliación de las Colonias". Quería sustituirlas —y así se hizo— por una expresión que no significase para el Instituto de Colonización el mandato legal de adquirir o expropiar tierras linderas a San Javier u Ofir. Estamos en condiciones de informar que poco antes un arrendatario de esas tierras linderas, traspasó su contrato de arrendamiento a un familiar del Senador Espalter. Se comprende que esta persona tuviese interés en que el Instituto no expropiara tales tierras.

De acuerdo, pues, con esta información fehaciente, el nombrado Senador ha cometido en ese asunto una segunda y grave trasgresión: el patrocinar como legislador una fórmula que beneficiaba a un hermano suyo".

(Interrupción del señor Representante Blanco Acevedo).

Ante la denuncia, señor Presidente, el Senado, creo que haciéndose eco de la denuncia el propio inculcado u otro Senador —admito que sea el propio inculcado, creo que lo fué— encargó a su Comisión de Asuntos Administrativos que investigue el hecho. Según mis

informes la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado comprobó —por otra parte está documentada en un juicio, en un Juzgado, (en un escrito firmado por el Senador Espalter, y otra en la versión taquigráfica del Senado— la veracidad de la denuncia. ¿Y qué ha ocurrido? Aquí no ha pasado nada; el Senado no ha tratado el asunto y el Senador Espalter sigue ocupando su cargo.

(Interrupción del diputado Blanco Acevedo).

Sr. CARDOSO. — Sr. Diputado Blanco Acevedo: usted, que habitualmente es un hombre tan tranquilo, ¿por qué se pone tan nervioso? Yo he dicho recientemente que el Senado tomó intervención en el asunto y encargó a una de sus Comisiones que investigará sobre él. Esta investigó y, según mis noticias, terminó su investigación, pero no ha producido informe.

(Interrupción del señor Representante Abdala. Campana de orden).

De manera que no correspondía que hiciéramos aquí la acusación.

EVIDENTE IMPLICANCIA DEL MIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL BANCO DE LA REPUBLICA, Sr. CARLOS SAPELLI. CON VIOLACION DE LA LEY 10.000, AL OTORGAR CUOTAS DE IMPORTACION, BENEFICIA A LAS EMPRESAS DE LAS QUE ES MIEMBRO EL SEÑOR SAPELLI

Sr. Presidente: ahora voy a entrar a ese capítulo al que hace un rato me referí, de la conducta del Banco de la República en relación con el otorgamiento de cuotas de importación.

La violación de la ley 10.000 por parte del Banco de la República, que establece la obligación de fijar el preventivo de las divisas aplicables a la importación, y su resolución de discriminar por empresas, plantea la situación del señor Carlos Sapelli, inversor o funcionario —porque es Síndico de Funsu— en las grandes industrias nacionales y, al mismo tiempo, miembro del Directorio —Vice-Presidente a veces en ejercicio de la Presidencia— del Banco de la República, que otorga las cuotas de importación que han de usar las mismas empresas que él dirige.

Puedo asegurar a la Cámara que hay centenares de casos en que el Banco de la República ha autorizado la importación de mercaderías y la apertura de créditos, a firmas beneficiarias de esta conducta ilegal, comunicándolo posteriormente al Contralor de Exportaciones.

No es la primera vez que esta situación de rotunda e intolerable implicancia del señor Sapelli es planteada en el seno de la Cámara. Este último verano —yo estaba ausente de Montevideo— la planteó

el señor Diputado Astiazarán en el transcurso del debate sobre el trigo. La acusación no fué contestada, pero la Cámara no tomó resolución.

Interrupción del diputado Batlle Pacheco).

Sr. CARDOSO. — Yo no estaba presente en esa sesión. Me extraña la afirmación del señor Diputado Batlle Pacheco, pero, en realidad, no tiene que ver con el asunto ni con las pruebas que voy a presentar ahora de las consecuencias extraordinariamente graves de esta situación, a tal punto, señor Presidente, que este solo asunto justificaría, por sí mismo, un debate de la Cámara para tomar alguna decisión.

Decía, señor Presidente, que yo mismo me había referido a esta situación en un documento incluido en un repartido de la Cámara: el número 638, de setiembre de 1953.

En esa oportunidad, el señor Diputado Arismendi propuso una investigación en FUNSA. Fui designado miembro de la Comisión Preinvestigadora y, al expedirme en minoría aconsejando que se investigasen las actividades de esa poderosa empresa, me referí a la situación del señor Sapelli, trayendo un documento del que ahora me voy a ocupar con más extensión: se trata de un informe presentado al Consejo Nacional de Gobierno por el Vice-Presidente del Contralor de Exportaciones, señor Alcides Patrón, en el cual —y ahora leo lo que entonces escribía yo en la Comisión Preinvestigadora— “de acuerdo con la publicación aparecida en “El País” y no rectificada, en un capítulo titulado “Discriminación del Banco por empresas”, se citan varios episodios en los que las autoridades del Banco de la República, cuyo Directorio integra el Síndico de FUNSA” se transcribe textualmente el documento del señor Patrón— “habría exhibido un criterio más benévolo frente al petitorio de la aludida sociedad industrial que respecto de otras solicitudes. Asimismo, el favor llegaría a veces a desdibujar el límite de las facultades acordadas al Banco de la República por la ley”.

“A continuación, en la publicación aludida” —continúo en mi informe a la Cámara— “da fechas y cifras de algunas operaciones. En una de ellas, ante un pedido del Contralor por U\$S 160.900 para atender una importación de FUNSA, el Banco aumentó la cantidad, aclarándose a título informativo —transcripción textual— que “el Banco ha establecido estos cupos por cantidades mayores a las solicitadas por ese Organismo” —el Contralor— “de acuerdo con el estudio realizado sobre las cifras que se mencionan en el expediente”. En la otra que cita también fué ampliada oficiosamente la cuota solicitada por el Contralor”.

Sr. MATTOS. — ¿Me permite interrupción?

Sr. CARDOSO. — Sí, señor Diputado.

(Interrupción del diputado Mattos).

Sr. CARDOSO. — Si las cosas, en cuanto a este expediente fueran como el señor Diputado Mattos lo dice, ese hecho quedaría no sé si

aclarado o explicado del modo que él pretende. Pero yo tengo aquí ahora sí, todo el documento del señor Patrón y de aquí surgen las preferencias con Funsa en forma multiplicada. Yo tengo ahora el documento oficial en mi poder que tuvo la amabilidad de proporcionarme el señor Diputado Wáshington Beltrán, que lo solicitó por intermedio de la Cámara al Ministerio de Hacienda hace un tiempo.

Apenas he dispuesto de unas breves horas en el día de hoy para examinarlo. Esto es muy extenso, tiene alrededor de cuarenta páginas, pero de una lectura rápida surgen algunas cosas que es necesario transmitir a la Cámara.

Así, por ejemplo, en la pág. 15 del informe del señor Patrón, y bajo el título “Las Cuotas” se dice lo siguiente: “Cuando el delegado del Banco me pidió informes sobre el alcance de mis expresiones “Cuotas con nombre propio de carácter alarmante” detalle este cuya gravedad o intrascendencia apreciará el señor Ministro, me pareció que lo fundamental hubiera sido saber si la dictadura existe y quién la ejerce. Diré, en primer término, que entre los saldos del semestre del 52 y lo que va del 53, el Contralor debió distribuir la friolera de 1370 cuotas. La falta de cumplimiento de la ley 10.000 por parte del Banco de la República, con preponderante intervención de su Departamento de Negocios con el Exterior, hace que el hombre o la empresa obtengan por gestión directa, lo que los cuantiosos intereses del país tendrían por derecho bajo las formas de repartos generales para los distintos ramos o destinos”.

Luego examina el señor Patrón, que creo que actualmente es Presidente en ejercicio del Contralor de Exportaciones e Importaciones, lo que se llama “Discriminación del Banco por empresas”. Digo, entre paréntesis, que yo no he titubeado en ningún momento en traer a la Cámara este documento del que es autor el señor Patrón porque lo conozco desde hace muchos años y sé que es una persona intachable, en la que se puede depositar plena y absoluta confianza.

Bajo ese título el señor Patrón transcribe una nota del Banco de la República en la que hace saber que “la institución se ha visto obligada a reducir el monto establecido por la inspección de necesidades practicada oportunamente”.

A continuación transcribe una nota según la cual la modificación no fué menos sino en más y se refiere precisamente a Funsa. Dice así: “El Directorio de este Banco en sesión de 6 del corriente ha dispuesto fijar las siguientes cuotas en primera categoría, destinadas a contemplar la importación de materias primas a que se refiere la gestión de Funsa: Inglaterra £ 19.188; Estados Unidos de América u\$S 203.324. A la vez, debemos informar que el Banco ha establecido estos cupos por cantidades mayores que las solicitadas por ese organismo, de acuerdo al estudio realizado sobre las cifras que se mencionan en el expediente. El Contralor pidió al Banco para atender esta importación u\$S 160.900. El Banco por sí la eleva a las cifras arriba indicadas”.

Dice a continuación: "A esta le aumentan, sentando un criterio de "Justicia distributiva" y transcribe otra comunicación del Banco según la cual —no voy a leerla toda— el Banco "se inclina por el temperamento de fijar cuotas destinadas a determinadas fábricas cuando ellas proporcionan la financiación en moneda extranjera a un plazo prudencial."

Fíjense, señores Diputados: el Banco de la República comunica al Contralor de Exportaciones e Importaciones que se inclina por el temperamento de fijar cuotas destinadas a determinadas fábricas cuando ellas proporcionan la financiación en moneda extranjera a un plazo prudencial. ¿Qué quiere decir esto? La preferencia para las grandes fábricas, para los grandes consorcios, para las grandes organizaciones capitalistas, para los grandes importadores.

Y sigue la comunicación del Banco: "De acuerdo con el criterio expuesto el Banco está dispuesto a contemplar el pedido presentado ante ese contralor por Funsa, para la importación de Bélgica de 140.000 kilogramos de alambre de cobre brillante de más de un milímetro por francos belgas. 7.000.000 y también las solicitudes presentadas directamente ante este Banco" —fíjense: y también las solicitudes presentadas directamente ante este Banco, lo que significa la violación flagrante de la ley 10.000— "para la importación de tela cord de Suiza por 205.000 francos suizos y caucho de origen Inglaterra por £ 130.000, atento a que la empresa referida se hará cargo de la financiación en moneda extranjera de estas compras por el término de seis meses".

El señor Vicepresidente del Contralor se refiere especialmente, en este punto preciso, a la situación del señor Sapelli. Lo dice con claridad: "El Vicepresidente del Banco de la República era hasta hace muy poco tiempo, varios períodos Presidente de la Cámara de Industriales, como Vicepresidente del Banco no debió permitir que en una resolución emanada de su seno se dijera: "El Banco se inclina por el temperamento de fijar cuotas destinadas a determinadas fábricas" concepto violatorio del precepto constitucional que consagra la libertad de trabajo sin discriminación alguna respecto a la capacidad económica financiera de nadie".

Voy a pasar una serie de páginas para llegar a la 20 donde el informe establece que el Banco introduce esta otra novedad en sus procedimientos: "Importadores con rango para realizar convenios de trueque".

"Con relación al asunto de referencia" —se trata de las Fábricas Nacionales de Cerveza S. A., importación de maquinarias de Suiza— "cuyo respectivo expediente se anexa a la presente, debemos llevar a su conocimiento que este Banco está dispuesto a aplicar el cambio que produzcan las exportaciones de lanas a Suiza que realice la firma Antonio Jung hasta el 28 de febrero próximo para la fijación de cuotas de importación que interesan a las fábricas Nacionales de Cerveza S. A."

Esta operación planteada en estos términos, fué rechazada, naturalmente, por el Contralor. "De haberse aceptado semejante temperamento" —dice el señor Patrón— "los exportadores de nuestra producción agropecuaria podrían inundar la plaza de mercadería, celebrando convenios de trueque de tipo comercial".

Más adelante, en la página 21, leo este párrafo, —es otra comunicación del Banco de la República: "En cuanto a la cuota para caucho y lastex, por 130.000 libras, debemos informar que este pedido ya ha sido contemplado por el Banco mediante el establecimiento de la cuota N° 2429 por igual importe, fijada en el mes de julio próximo pasado. Este hecho —agrega el Banco— "también ha sido conformed por el señor Presidente de FUNSA, don Pedro Sáenz".

Y a continuación, otra continuación. Dice: "Montevideo, 6 mayo de 1953. Asunto FUNSA. Cúmplenos transcribir a continuación el texto de la resolución adoptada por el directorio de este Banco en sesión de fecha 4 actual. Anúlense las cuotas 30680 y 30784 por 230.324 dólares y 19.100 dólares, establecidas en Estados Unidos en dólares del convenio con Francia, para la importación de la importación de materias primas destinada a FUNSA. Fíjanse en sustitución dos cupos de cambio, 30794 y 30865, por 72.616 libras y 6.822 libras, equivalentes en libras esterlinas de dichas cantidades, para atender la importación de las mismas mercaderías de igual origen. Exprésese al Contralor de Exportaciones e Importaciones, que el Banco ha adoptado esta resolución frente a una gestión que en tal sentido le fuera planteada directamente por FUNSA".

Y dice el señor Patrón: "El arbitraje de libras esterlinas a dólares libres para el pago de mercaderías de Estados Unidos, era mucho más conveniente que el arbitraje de dólares de convenio franco-uruguayo a dólares libres. ¿Hubiera estado el Banco en condiciones de asignar igual tratamiento a todas las empresas que realizaran la importación de los Estados Unidos, financiadas con monedas inconvertibles?

(Interrupción del señor Representante Dubra).

Y finalmente, para no cansar a la Cámara con lecturas, otra comunicación también sobre FUNSA.

"Cuota para la importación de diversas maquinarias. Cúmpleme llevar a vuestro conocimiento que el Banco ha resuelto reconsiderar su resolución de 15 de diciembre último, acordando fijar en virtud del arreglo convenido de América por 44.000 dólares libres en la primera categoría, destinada a atender la importación de maquinarias que gestionó ante ese Contralor la Fábrica Uruguaya de Neumáticos, S. A.". Y agrega el señor Patrón: "El 26 de enero de 1953 el Banco en nota a ese Ministerio declaraba que el saldo de lanas existente serían 55.000.000 de kilos, expresando que vendiendo el 10 % de esa cifra a Estados Unidos, se obtendrían divisas fuertes por 32.000.000 dólares, los que serían —decía el Banco— "absorbidos totalmente por ANCAP". Agregaba que con recursos casi nulos debían

atenderse compras de ese origen, tales como materias primas, algodón virgen, maquinaria agrícola-industrial, repuestos en general, combustibles sólidos, etc."

Por lo que se ve, el Banco cambió de criterio o no aplicó ese criterio al otorgar a FUNSA esa cuota para la importación de maquinarias.

Habría muchas otras; pero cabe, en primer término, preguntarse dónde ha quedado la ley 10.000, y agregar que este informe del Vice-Presidente del Contralor fué presentado al Ministerio de Hacienda hace ya un año: el 12 de agosto de 1953.

¿Qué ha hecho el Consejo Nacional de Gobierno? Lo ignoramos.

Para terminar con este asunto, quiero mencionar lo que el propio señor Patrón dice en la página 37, al concluir: "El Presupuesto General de Gastos, promulgado últimamente, se acerca a los \$ 500.000.000 anuales. Si bien corresponde al Poder Ejecutivo la responsabilidad de la gestión aún cumplida bajo las distintas formas de la estructura jurídica del Estado, la cifra empalidece frente a los ochocientos o mil millones de pesos que pasan anualmente bajo la égida del Departamento de Negocios con el exterior del Banco de la República y de los nuevos miembros de la Comisión Honoraria de Contralor de Exportaciones e Importaciones".

El Banco de la República ha desalojado al Contralor. Y en el Directorio del Banco de la República actúa, ocupando el cargo de Vice-Presidente, el señor Carlos Sapelli, directamente vinculado, como propietario o como alto funcionario, a las más poderosas firmas de plaza que, naturalmente, pueden beneficiarse y se benefician, — como surge comprobadamente de estos documentos— del criterio adoptado por el Banco de la República.

Dejo este asunto a la meditación de la Cámara.

EL CASO DEL DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL TRABAJO. CUANDO EL PODER POLITICO APOYA O PROTEGE LA CORRUPCION ADMINISTRATIVA ES CUANDO EL PODER POLITICO ESTA TAMBIEN INFECTADO POR UNA PROFUNDA CORRUPCION POLITICA

Sr. Presidente: ahora una síntesis de otro caso que nosotros consideramos, con toda razón, un ejemplo de corrupción administrativa, no sólo por el caso en sí mismo, ya ventilado en la Cámara, sino por la actitud posterior de los Gobernantes. Me refiero a la Universidad del Trabajo.

En agosto de 1953, el Ministro de Instrucción Pública y Previsión Social fué interpelado por mi compañero de sector, el señor Diputado Dubra, respecto a la situación imperante en la Universidad del Trabajo. El destacó entonces una situación de corrupción administrati-

va que la inercia del Parlamento transformó también en un acto de corrupción política. Y va a surgir de mis palabras.

Mi compañero de sector probó de manera categórica en aquella interpelación, entre otras cosas, las siguientes. Primero, que el Director de la Universidad del Trabajo, Arquitecto Nunes, había contratado obras personalmente, sin autorización del Consejo y sin licitación pública, por un valor superior a \$ 350.000. Segundo, que a los efectos de violar la ley, el arquitecto Nunes fraccionó los pagos a realizar por la ejecución de dichas obras, en órdenes menores de mil pesos cada una, por lo que autorizó más de trescientas órdenes de esta naturaleza para pagar obras contratadas por centenares de miles de pesos.

Se trató de "respetar" —esto de respetar debe ir entre comillas— la ley que establece que toda adquisición mayor de mil pesos debe ser efectuada por licitación pública, fraccionando los pagos por cantidades menores de mil pesos, aunque las obras alcanzaban a cientos de miles de pesos.

El arquitecto Nunes, con absoluto menosprecio de una ley destinada a defender el erario público de los jerarcas deshonestos o corrompidos, actuó en el manejo de los dineros públicos como si fueran de su patrimonio particular.

Tercero: pero todavía para agravar esta situación de subversión legal y corrupción administrativa, quedó probado que el feliz contratista de estas obras, contratadas directamente con violación de la ley, era una persona íntima amiga del arquitecto Nunes. Este íntimo amigo del jerarca realizó las obras por encargo directo del arquitecto Nunes violando la ley de licitaciones y sin conocimiento del Consejo de la Universidad del Trabajo.

Cuarto: se probó además, en la interpelación de mi compañero de sector, la adquisición de maquinarias por algunas decenas de miles de pesos, por funcionarios de menor jerarquía de la Universidad del Trabajo, sin licitación pública y también sin conocimiento del Consejo Directivo del organismo. Los pagos también fueron autorizados por el Arquitecto Nunes sin conocimiento del Consejo. Estos hechos se agravan todavía por la circunstancia de que los funcionarios que adquirieron esas máquinas eran a su vez empleados —según se denunció en la Cámara— de las casas de comercio que las habían vendido.

Quinto: en ese episodio parlamentario se probó, además, que se habían efectuado 608 nombramientos ilegales, repartidos muchos de ellos entre amigos personales y políticos del arquitecto Nunes y de la mayoría del Consejo que desgobernó la Universidad del Trabajo hasta 1952.

En esta interpelación que estoy glosando se probaron además otras cosas, de las que no voy a hacer caudal, porque las señaladas alcanzan y sobran para evidenciar la profunda corrupción administrativa imperante en la Universidad del Trabajo, mientras el archi-

tecto Nunes tuvo a su servicio una incondicional mayoría en el Consejo.

Sr. CARDOSO. — Acababa de puntualizar los graves cargos surtidos contra el Director de la Universidad del Trabajo en la interpelación del Diputado Dubra. Pues bien; por una incondicional solidaridad de los representantes del Partido Colorado de gobierno, en la Cámara, el Parlamento se negó a votar la condenación de esa corrupción existente en una repartición pública de la importancia de la Universidad del Trabajo.

Pero hay un nuevo hecho de extraordinario interés acaecido con posterioridad a la interpelación que estoy comentando: el Tribunal de Cuentas de la República destacó, a solicitud de la actual mayoría del Consejo, un contador para que investigue las denuncias formuladas por el Diputado Dubra.

En un extenso, laborioso y profundo informe dicho contador ha expresado al Tribunal de Cuentas que es verdad todo lo denunciado por el doctor Dubra, y que éste se ha quedado corto en la pintura del desbarajuste imperante en la Universidad del Trabajo. Lo curioso es que el arquitecto Nunes se encuentra en el desempeño de su cargo, desde hace casi cuatro años, en carácter interino, pues luego de su primera designación por el presidente Batlle Berres no fué nombrado nuevamente a la expiración de su mandato. En otros términos: si el Consejo Nacional de Gobierno hubiera deseado salvaguardar a la Universidad del Trabajo de la acción nefasta de uno de los principales responsables de la corrupción imperante en ese organismo, le habría bastado con designar a un sustituto del arquitecto Nunes, sin tener que hacer su remoción o su enjuiciamiento de acuerdo con las normas constitucionales. Habría bastado tan sólo con nombrar un sustituto. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo ha hecho? Sencillamente por solidaridad política con el jerarca de ese Servicio, lo que permite afirmar que cuando el Poder político apoya o protege la corrupción administrativa es cuando el Poder político está también infectado por una profunda corrupción política.

(Interrupción del diputado Terra).

FRAUDE ELECTORAL ORGANIZADO EN RIVERA

Sr. CARDOSO. — No he querido que faltase en este desfile tan desagradable un caso del que no conozco precedentes en la historia política del país. Me refiero a esa denuncia de un fraude electoral organizado en gran escala en el norte de la República, especialmente en Rivera.

Ha sido denunciado, también, por el periódico de mi Partido hace pocas semanas.

Lo esencial del asunto es lo siguiente: el procedimiento consiste en incorporar familias brasileñas enteras al Registro Civil, utilizando las facilidades otorgadas para la incorporación de inscripciones

omitidas, fabricando falsos testimonios y utilizando luego esos certificados de inscripción para gestionar —esto es un perfeccionamiento de la maniobra— a los ancianos de la familia así transformada, por arte de birli birloque en familia uruguaya, la pensión a la vejez correspondiente.

Yo he tratado de confirmar esta denuncia, y estoy en condiciones de aportar algunos elementos de juicio que le dan verdadera seriedad. Fijense los señores Diputados en estas cifras. En los últimos periodos inscripcionales se han inscripto en Rivera 17.912 nuevos ciudadanos, correspondiendo 9.449 al periodo anterior, y 8.463 al que terminó el 15 de mayo.

Este origen fraudulento, si no de la mayoría, de una gran parte de estas inscripciones es, en el departamento de Rivera, cosa pública y notoria, me dicen personas que conocen el asunto.

La Corte Electoral ha tomado intervención frente a ese crecimiento desmesurado, gigantesco, del Registro departamental, y ha ordenado la revisión de todas las inscripciones.

Sr. PUIG. — ¿Podría repetir el señor Diputado esas cifras?

Sr. CARDOSO. — En los dos últimos periodos se inscribieron 17.912 nuevos ciudadanos, de los cuales 9.449, en el periodo anterior y 8.463 en el que terminó el 15 de mayo.

La Corte Electoral ha destacado un funcionario —cuyo nombre tengo aquí— que según mis informes ha podido adelantar ya, por los datos recibidos hasta ahora, que el 30 % ó más de esas inscripciones está basado en incorporaciones tardías al Registro Civil, lo cual es ya una presunción de la veracidad de la denuncia.

(Interrupción del señor Representante Lepro).

—Es un hecho éste que también someto a la meditación de la Cámara.

(Interrupción de los diputados Palomeque y Lepro).

Sr. CARDOSO. — Creo que de las palabras del señor Diputado Lepro se ha desprendido, por lo menos, la posibilidad cierta de que la denuncia sea exacta, pues ha afirmado que hay cantidad de personas que son ciudadanos brasileños y uruguayos al mismo tiempo...

(Interrupción del señor representante Arismendi).

—...y que hasta pueden ser candidatos electos en Brasil y en Uruguay.

Apunto, señor Presidente, que hay una manera muy segura de comprobar la veracidad o falta de fundamento de la denuncia: hacer una inspección domiciliaria, ver si esas personas viven en Rivera o en el Brasil. Según esta denuncia una gran cantidad no viven en Rivera sino en el Brasil.

LA CORRUPCION EN LOS PROCEDIMIENTOS POLITICOS Y ADMINISTRATIVOS ES UNA REALIDAD ALARMANTE

Pensemos en lo que podríamos ser y no seremos si no se pone dique a estos graves males.

—Señor Presidente: he llegado casi al final de mi exposición, en la que he dicho una parte de lo que yo sé en materia de corrupción política y administrativa del país. Esta exposición, como los señores diputados los comprenderán, está lejos de ser exhaustiva. Nosotros no tenemos acceso fácil a la administración pública. Pienso que si en algunos de los organismos a que me he referido hubiera podido actuar una Comisión investigadora como en el Puerto, como en el SOYP, etc., se habrían comprobado allí cosas tan graves o más que las que allí se comprobaron.

Antes de finalizar quiero traer a la Cámara una anécdota que estos días ha llegado a mi conocimiento. Esta información me ha sido proporcionada por varios profesores de Enseñanza Secundaria. Yo no he podido tener en mi mano el documento, pero le atribuyo seriedad a la información por su origen en varias personas integrantes del personal docente de Enseñanza Secundaria. Entre los profesores circula la información desde hace muchos días.

En el Instituto Vázquez Acevedo, Preparatorios, se viene realizando una interesante experiencia colectiva destinada a incrementar el conocimiento por los jóvenes de los derechos humanos, dentro de un plan mundial de la UNESCO. Es una experiencia dirigida por ese organismo, en que hay incluidos institutos similares de Estados Unidos, Yugoslavia, Liberia, etc. Uno de los trabajos que se están realizando en este seminario de la UNESCO consiste en contestar un test en cuyas preguntas constaba la siguiente, que se formuló a alrededor de quinientos alumnos de la Sección Preparatorios: si se realiza una elección en la que son candidatos un hombre bueno, honrado y entendido, frente a un ladrón, sinvergüenza e ignorante, diga usted quién gana. La casi unanimidad de los alumnos contestó que ganaba el ladrón, sinvergüenza e ignorante.

(Murmullos - Hilaridad).

—Declaro que a mí esta información me produjo una profunda conmoción. He ahí, me dije, lo que piensan los jóvenes de la política criolla, de la política uruguaya; he ahí lo que piensan los jóvenes, que serán llamados mañana a dirigir los destinos colectivos; he ahí los resultados de una siembra funesta.

Sr. VASCONCELLOS. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. CARDOSO. — Yo ya termino.

Termino diciendo lo siguiente: creo haber probado la afirmación

que hice en la sesión del miércoles, y que dió origen a la que hoy estamos realizando. No puede negarse, por todo lo que yo he dicho y por otras cosas, que yo no he dicho pero que todos ustedes saben, señores diputados, que la corrupción en los procedimientos políticos y administrativos es una realidad alarmante.

La Cámara debe ahora pronunciarse, pero antes de terminar quiero agregar todavía esto. Esta exposición nuestra, esta actitud del sector socialista, nos acarreará animosidades, enojos, enemistades, etc. Ya lo hemos podido palpar en la propia sesión de hoy. En cierto modo lo descontábamos. No nos complace; pero nada podrá borrar de nuestra conciencia el convencimiento de que estamos sirviendo al interés público.

Yo amo a mi país; y con inquietud creciente lo veo perder los atributos... (Apoyados.)

—...que lo hicieron acreedor al respeto general. No busquemos consuelo, señores diputados, comparándonos con los que están peor que nosotros, atrasados y faltos de libertades fundamentales. Eso no vale. Pensemos en lo que podríamos ser y no seremos si no se pone dique a estos males.

He terminado.

(Muy bien! — Aplausos en la barra — Campana de orden).



Plataforma Electoral del Partido Socialista

Contra la Explotación Capitalista y la Corrupción Política

Por un Nuevo Uruguay

1. La tierra para el que la trabaja.
2. Industrias al servicio del pueblo y no para fabricar millonarios.
3. Trabajadores y consumidores al gobierno de los servicios públicos.
4. Representación obrera en los Directorios de las Cajas de Jubilaciones.
5. No más impuestos al pueblo: gravar las fortunas.
6. Socialización de la Medicina: igualdad en el cuidado de la salud.
7. Plan integral de viviendas: una para cada familia.
8. Seguro General de Paro. Aplicación total de la Ley de Industrias Insalubres.
9. Contra el Colegiado batlli-herrerista de corrupción administrativa y represión sindical.
10. Paz sin imperialismos ni dictaduras.